

EI NUEVO CONCEPTO DEL DERECHO A LA VIDA EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Renata Cenedesi Bom Costa Rodrigues
Doctoranda en Derecho Constitucional por la Universidad de Valladolid

SUMARIO: INTRODUCCIÓN; **I-**CONFLICTOS DE NORMATIVAS DE DERECHO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL, ¿CUÁL DERECHO DEBE PREVALECEER EN CASOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS?; **II-**LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU FUNCIONALIDAD; **III-** LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA VIDA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS **IV-**LA INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS; **V-**LA JURISPRUDENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA REFERENTE AL DERECHO A LA VIDA Y SU EVOLUCIÓN; **VI-** CONCLUSIONES; **VII-** ANEXO JURISPRUDENCIAL; **VII-**BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN:

La dignidad es un atributo esencial de la condición humana, independientemente de las calificaciones específicas de sexo, raza, religión, nacionalidad, posición social, o cualquier otra especificidad; será con esta base ideológica y doctrinal que iniciaremos el estudio del sistema interamericano de derechos humanos con la exposición del funcionamiento de sus principales órganos: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sus competencias consultiva y contenciosa, teniendo como parámetro la sistemática europea y el estudio de los principales instrumentos internacionales y nacionales de protección del derecho a la vida. El análisis de los artículos referentes al derecho a la vida en las constituciones española, brasileña y argentina nos llevará a las conclusiones del intercambio entre leyes internas e internacionales, además de elucidar el porqué de la necesidad de la ampliación de la protección jurídica de la vida protagonizada por las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El objetivo de este artículo no se limita, sin embargo, a hacer una análisis comparativo del sistema interamericano de derechos humanos; pretendemos, además demostrar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ampliado el concepto del derecho a la vida, lo que representa el rescate y la reafirmación del principio de la indivisibilidad de los derechos humanos y de la dignidad de la persona humana. Estos dos principios pueden ser considerados el eje de la transformación conceptual de este derecho. De acuerdo con la concepción ampliada del mismo es preciso ofrecer una protección amplia de la vida,

que incluya tanto los aspectos de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales.

Se pretende, por lo tanto, ilustrar la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana en lo que concierne en la protección jurídica de la vida, puesto que al rescatar los principios de la indivisibilidad de los derechos humanos, también torna efectivo el principio de la dignidad humana y concreta la intención de todo ser humano de tener su vida protegida en la totalidad, lo que le garantizará el derecho de vivir con un nivel adecuado de vida, o sea, vivir una vida digna.

I- CONFLICTOS DE NORMATIVAS DE DERECHO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL, ¿CUÁL DERECHO DEBE PREVALECER EN CASOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS?

Antes de empezar el análisis de la evolución del contenido del derecho a la vida, es conveniente reflexionar sobre dos puntos previos. El primero es el referente a los conflictos que pueden surgir cuando un tratado internacional contradice la legislación interna de un Estado que lo ha firmado. El segundo, que será analizado en la próxima sección, es la estructura de la Corte Interamericana y sus funciones.

Sobre el primer punto previo, la relación entre las normas internacionales y el ordenamiento interno, la jurista brasileña Flávia Piovesan, enumera, de modo claro e expresivo, las hipótesis que pueden ocurrir al considerar los Tratados, Acuerdos o Convenciones intencionales incorporados al ordenamiento interno, son ellas:

- a) Coincidir con el derecho asegurado por la Constitución.
- b) Integrar, complementar y ampliar el universo de Derechos constitucionalmente previstos.
- c) Contrariar el precepto del Derecho Interno¹

Al analizarse la primera hipótesis, en la cual el precepto dictado por el tratado coincide con el dispuesto en el ordenamiento interno, no se verifica un conflicto propiamente dicho, visto que esa situación demuestra la preocupación del legislador por la defensa de los derechos humanos, y el Tratado viene a resaltar el valor jurídico ya estipulado en el precepto normativo, lo que deja el Estado sujeto a ser responsabilizado internamente e internacionalmente. En segundo plano, al ser incorporados en el ordenamiento interno los tratados internacionales que versan sobre derechos diversos de aquellos que ya son asegurados por la Constitución, se amplía el número de derechos asegurados nacionalmente, por cuánto uno de los objetivos del sistema internacional de derechos humanos es complementar o rellenar las lagunas existentes en el ordenamiento jurídico interno del Estado con el propósito de asegurar la efectividad de la defensa de los derechos de la persona. La tercera hipótesis, y la que suscita la mayoría de los conflictos doctrinales y jurisprudenciales, es la de saber qué normativa debe prevalecer en caso de

¹ PIOVESAN, Flávia. *Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional*. 4ª Edição. Ed. Max limonad, 2000. Pág.111 (Traducción hecha por el autor).

conflicto entre el tratado internacional de derechos humanos y los derechos consagrados por la Constitución interna del país, que versen sobre la misma materia. La dificultad está en establecer las características de tales normativas, es decir, si deben ser consideradas normas de naturaleza constitucional o si hay una jerarquía entre ellas.

En España la problemática de la incorporación de los tratados internacionales por el ordenamiento interno es estudiada tanto en el ámbito del Derecho constitucional como por el Derecho Internacional, siendo común en la doctrina la aceptación de los tratados internacionales como fuente de derecho². Los tratados también son considerados como un instrumento interpretativo en la concreción de los derechos fundamentales de la CE en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución Española; tanto que en algunas ocasiones el Tribunal Constitucional Español ha empleado normas internacionales para interpretar los derechos fundamentales³, y en otros casos acudió a los tratados para integrar el contenido de los derechos fundamentales incorporándole contenidos que no estaban previstos expresamente⁴. Sin embargo, como enfatiza el profesor Díez-Picazo, “el propio Tribunal Constitucional ha mantenido, de manera también constante, que los tratados internacionales no pueden crear nuevos derechos fundamentales en el ordenamiento español; lo que significa que la vulneración de un derecho reconocido sólo mediante tratado internacional, sin equivalente en la Constitución Española, no determina la inconstitucionalidad de las leyes, ni puede ser objeto de recurso de amparo”⁵. Pero lo cierto es que los tratados internacionales gozan de una fuerza pasiva superior a las leyes, que se puede entender como una resistencia a la derogación⁶.

La Constitución Española dedica a las normativas internacionales el capítulo III del título III (arts. 93 a 96), para dictar el procedimiento necesario para que el tratado sea válido dentro del ordenamiento interno español, siendo considerado un procedimiento distinto dependiendo de la naturaleza del tratado. No obstante, estos procedimientos diversos no son considerados obstáculos ya que una vez ratificado el tratado, de conformidad con el artículo 96.1 “sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional”. Así, en las palabras de Balaguer Callejón, “no hay, por tanto, posibilidad de que el Estado modifique, suspenda o derogue el tratado por su propia

² Esto ocurre debido la aplicación del artículo 96.1 de la Constitución Española que dicta: “Los tratados Internacionales validamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”.

³ Sentencia 91/2000 del Tribunal constitucional español, en la cual el Tribunal determinó “contenido absoluto” de los derechos fundamentales, creando un estándar básico y universal de protección. J. B. Freijedo, Francisco; Villaverde Menéndez, Ignacio; Requejo Rodríguez, Paloma; Presno Linera, Miguel Ángel; Benito Aláez; Ignacio F. Sarasola. *Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978*. Ed. Tecnos. Madrid, 2004. Pág. 177

⁴ Esta función interpretativa fue utilizada por el Tribunal constitucional Español en la Sentencia 190/194. También en la Sentencia 292/2000 el Tribunal Constitucional señaló que las disposiciones de los Tratados Internacionales a tenor del artículo 10.2 de la Constitución Española, constituyen “valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y libertades que la constitución reconoce”. *Ídem*

⁵ DÍEZ-PICAZO, Luís Maria. *Sistema de Derechos Fundamentales*. Ed. Thomson Civitas, 1ª Edición. Madrid, 2003. Pág. 152

⁶ *Ídem*

voluntad (...)”⁷. Por ello, se percibe que los tratados internacionales presentan un “contenido necesario”, que vincula los Estados signatarios⁸.

En Brasil, el procedimiento general de incorporación de tratados internacionales se rige por el artículo 49 de la Constitución Brasileña⁹, el cual establece la necesidad de referéndum del Congreso Nacional por decreto legislativo y posterior promulgación y publicación hecho por decreto presidencial¹⁰. Después de este procedimiento el tratado es considerado como una ley ordinaria interna, es decir, su interpretación y utilización dentro del ordenamiento jurídico estatal debe respetar las limitaciones impuestas por la Constitución¹¹. Sin embargo, este procedimiento general, en el caso de normativas internacionales de protección a los derechos humanos, suscitaba innumerales controversias, debido a los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la constitución brasileña, que enfatizan:

§ 1º - Las normas rectoras de los derechos y garantías fundamentales tienen aplicación inmediata.

“§ 2º - Los derechos y garantías expresas en esta Constitución no excluyen otros derechos o garantías decurrentes del régimen o de los principios por ella adoptados, o de los tratados internacionales en que la República Federativa de Brasil sea parte.”¹²

Para Piovesan, cuando la Carta Magna Brasileña dicta estos preceptos, lo que hace es incorporar en la propia Constitución las normativas internacionales ya ratificadas por el Estado Brasileño, o mejor dicho, da al tratado internacional un carácter de norma constitucional¹³, además de dar aplicabilidad inmediata después de ratificado el tratado. Esta interpretación adquiere aún más argumento al analizarse lo que dicta el preámbulo de la Constitución Brasileña en su artículo 4:

“A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios :

Inc. II - Prevalência dos direitos humanos [grifo del autor)”

Esta previsión constitucional deja clara la intención del Estado Brasileño de fortalecer la plena efectividad de la protección jurídica de los derechos humanos. Sin embargo la

⁷ BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Coord. Derecho constitucional. Vol. I. 2ª edición. Pág. 140, Madrid, 2003

⁸ RUBIO LLORENTE, Francisco. Apud. Díez-PICAZO, Luís Maria. *Sistema de Derechos Fundamentales*. Ed. Thomson Civitas, 1ª Edición. Madrid, 2003. Pág. 154

⁹“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;”

¹⁰ “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;”

¹¹ MORAES, Alexandre. *Direito constitucional*. 9ª edición. Editora Atlas. São Paulo, 2001. Pág. 588. El art. 102, III, b, de la Constitución Brasileña, que confiere al Supremo Tribunal Federal la competencia para “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”.

¹² Traducción hecha por el autor.

¹³ PIOVESAN. Flavia. *Op. cit.*, p. 86-87

discusión no quedaba zanjada por esta disposición, ya que algunos doctrinantes sostenían que ello implicaba el menoscabo del concepto de soberanía. Si bien la postura mayoritaria se inclinaba hacia la plena integración en el ordenamiento nacional y, por lo tanto, la aplicación en el ámbito del derecho interno – como ocurría simultáneamente en otros Estados americanos que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos¹⁴ - fue necesaria la promulgación de la Enmienda Constitucional N° 45. Esta enmienda, del 8 de diciembre de 2004, introduce las siguientes modificaciones en el tratado dado a los Tratados de Derechos Humanos:

1. En el artículo 5° de la Constitución Brasileña se ha añadido 2 párrafos más de extrema relevancia: El § 3° dicta que los Tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido aprobados por las dos Cámaras del Congreso Nacional son equiparables a las enmiendas constitucionales, o sea, adquieren status de norma constitucional. El otro párrafo, el § 4° somete Brasil a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional¹⁵.
2. Deja clara la competencia de los Tribunales Federales para juzgar las violaciones de derechos humanos y el las hipótesis de grave violación será de competencia del Procurador de la República, o sea, el fiscal General, asegurar el cumplimiento de las normas dictadas por los tratados internacionales de derechos humanos que Brasil ya sea parte independiente de la fase del proceso judicial¹⁶.

La reforma constitucional no deja duda alguna: Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado brasileño poseen la capacidad de modificar la Constitución, complementando su carta de derechos.

La Comisión Europea de Derechos Humanos ha seguido una fórmula similar a la brasileña, al declarar que las obligaciones asumidas por las Altas Partes Contratantes en la Convención (Europea) son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas

¹⁴ Uno de estos ejemplos es el de Argentina que ya fue expuesto en este trabajo, al dictar en su artículo 75 los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino. Además, más países han cambiado sus ordenamientos internos para estar en conformidad con lo que dicta la sociedad internacional. Así se observa la Constitución de Nicaragua; la Constitución de Guatemala y la de Colombia de 1991 que son semejantes a la de Argentina.

¹⁵ Para mejor comprensión expongo los párrafos en la lengua oficial y el la íntegra: § 3° *Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.* § 4° *O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.* (NR). Texto retirado de la página web del Senado Federal de Brasil: <http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia>

¹⁶ Estos cambios fueron añadidos en el artículo 109, V-A y párrafo 5° de la Constitución brasileña, que se quedará en la Lengua oficial y en la íntegra: Art. 109: *Aos juízes federais compete processar e julgar: V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; § 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.* <http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia>

Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes ("Austria vs. Italy", Application No. 788/60)"¹⁷

La postura apuntada y defendida por el juez de la Corte Interamericana, Cançado Trindade, es la de que sostiene que en materia de derechos humanos debe aplicarse el *principio de la primacía de la norma más favorable a las víctimas*, de forma que en caso de conflicto de normas debe prevalecer la norma más beneficiosa al ser humano¹⁸. Así, si la norma más beneficiosa fuera de la ley interna, ella también debe ser respetada por el ordenamiento internacional, ya que el objetivo de los tratados internacionales de derechos humanos es la protección del individuo de la mejor forma posible, no siendo el propósito del tratado impedir el advenimiento de las normas internas que protejan los derechos de la persona¹⁹. Si la norma más beneficiosa procede de un tratado internacional, esto no significa que la normativa constitucional sea nula, la interpretación más correcta sería que el tratado por ser considerado más benéfico, complementaria el precepto constitucional. La norma más favorable siempre será la más amplia y nunca la restrictiva. De este modo, el criterio o principio de la aplicación de la norma más favorable a la víctima se consagra tanto en los propios tratados internacionales de protección a los derechos humanos²⁰ cuanto en la práctica de la jurisprudencia de los órganos internacionales²¹.

Así, se concluye que en caso de conflicto entre normativas internas e internacionales o entre dos tratados que versen sobre un mismo asunto, en este caso el derecho a la protección jurídica a la vida, prevalecerá el criterio de la norma más beneficiosa a la víctima, que podría compararse muy bien con el principio penal del "in dubio pro reo", ya

¹⁷ Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos n. 2/82 de 24 de septiembre, párrafo 29.

¹⁸ CANÇADO TRINDADE, Antonio. *A Proteção Internacional dos direitos humanos – Fundamentos Jurídicos e Instrumentos Básicos*. Ed. Saraiva. 1996. Pág. 50

¹⁹ En este sentido, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos humanos prevé que: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) **limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados**; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza".

²⁰ Ver Art. 5 (2) del Pacto Internacional de los derechos civiles y Políticos; art. 5 (2) del Pacto Internacional de los derechos sociales, económicos y culturales; Art. 41 de la Convención sobre los derechos del niño; art. 23 de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer; Art. 29 (b) de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 13 y 14, de la Convención Interamericana para prevenir, condenar y erradicar la violencia contra la Mujer; Art. 5 de la Convención de 1951 relativo al Estatuto de los Refugiados y Art. 60 de la Convención Europea de Derechos humanos.

²¹ Por ejemplo la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte Interamericana referente a la interpretación de los artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En este parecer, la Corte opina que el texto de la Convención Americana define de manera más amplia a la libertad de expresión, que comprende, según el artículo 13, el derecho de toda persona a buscar y difundir información por cualquier procedimiento de su elección, que la ley de Costa Rica, que autoriza la búsqueda de información, y su difusión a través de los medios de comunicación social, solamente a un grupo reducido de personas, como son los miembros de un colegio de periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985

que en caso duda debe prevalecer la norma más beneficiosa al ser humano, que es el titular de los derechos preconizados.

Hay que destacar que independientemente del número de normativas referentes a la protección del derecho a la vida, la última palabra sobre cual debe prevalecer será siempre la concerniente de la apreciación del juez, tanto en el ámbito interno, cuanto en el ámbito internacional. Por ello, el juez será el mayor implicado en la aplicación de la norma más favorable a la víctima, y el Estado será obligado a ejecutarla. Este ejercicio se verificará perfectamente con el análisis de la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana, puesto que el ejercicio o utilización por los jueces de la Corte del principio de la norma más favorable a la víctima, conjuntamente con los principios de la dignidad de la persona humana y de la indivisibilidad de los derechos humanos, es lo que mostrará la evolución y la ampliación de la protección del derecho a la vida en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

II- LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU FUNCIONALIDAD

El segundo de los puntos que es preciso analizar, antes de adentrar en el estudio de la evolución del concepto al derecho a la vida, es el papel que juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la protección de estos derechos. La Convención Americana establece dos organismos para la protección de los derechos que consagra: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos²².

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un tribunal establecido por la mencionada Convención, con el propósito primordial de resolver los casos que se le sometan de supuestas violaciones de aquellos derechos humanos protegidos por ella. Este tribunal se encuentra regulado en los arts 52 a 69 del Pacto de San José, donde se establece su integración por siete jueces²³ elegidos por los Estados-Parte de la Convención Americana. El funcionamiento de la Corte se encuentra bajo la dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la OEA²⁴.

Este tribunal internacional ejecuta las siguientes competencias: a) **consultiva**, muy amplia, pueden consultar todos los miembros de la O.E.A. aunque no sean parte de la Convención²⁵. Las consultas pueden ser sobre la Convención u otros Tratados concernientes a los derechos humanos o la compatibilidad de leyes internas y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos; b) **contenciosa**, pues se

²² Segundo párrafo del Preámbulo de la Convención Americana de Derechos humanos

²³ La composición actual de la Corte Interamericana es la siguiente: *Hernán Salgado (Ecuador)*, *Antonio Augusto Cançado Trindade (Brasil)*, *Alirio Abreu Burelli (México)*, *Máximo Pacheco Gómez (Barbados)*, *Sergio García Ramírez (Colombia)*, *Oliver Jackman (Venezuela)*, *Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica)*. www.corteidh.or.cr. Fecha: 28/04/2004

²⁴ Artículo 59 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

²⁵ Artículo 64, 1 y 2 de la Convención Americana

halla facultada para decidir con carácter obligatorio los casos que sean sometidos sobre la interpretación y aplicación de la Convención, donde sólo los Estados parte de la Convención y la Comisión pueden someter un caso al estudio de la misma y se puede garantizar a la persona lesionada el goce del derecho o libertad conculcados y acordar, si es procedente, indemnización²⁶.

El procedimiento para que un Estado sea demandado ante la Corte Interamericana pasa, básicamente, por cinco etapas procesales: interposición de la acción por la Comisión o por el Estado; la fase probatoria, cuyas pruebas pueden ser presentadas por la Comisión, por el Estado, por la presunta víctima, o por sus familiares (en los dos últimos casos directamente o a través de representantes); la fase decisoria; la etapa de la reparación, que ocurre cuando en la sentencia de mérito no ha sido mencionada la reparación; y la quinta y última etapa es la de la ejecución de la sentencia que es definitiva e inapelable. En caso de extrema urgencia se pueden imponer medidas provisionales, con el propósito de preservar la integridad física y la vida de las personas amenazadas.

Las resoluciones sobre medidas provisionales de protección incluyen el requerimiento, por parte de la Corte, al Estado para que informe periódicamente sobre su cumplimiento. Así mismo se solicita a la Comisión que presente a la Corte sus observaciones sobre los informes estatales. Esto ha posibilitado a la propia Corte ejercer, además de la protección de carácter preventivo, una continua vigilancia al cumplimiento por parte de los Estados en cuestión, de las referidas medidas provisionales de protección por ella dictadas²⁷. Hay que mencionar que una de las mejores aportaciones dadas por la jurisdicción de la Corte Interamericana es la influencia que ejerce sobre la legislación, la jurisprudencia y la práctica de los países de América. Como señala el juez de la Corte, Sergio García Ramírez, es “el buen legado de la globalización”²⁸, en el cual se ve el intercambio entre los Tribunales internacionales principalmente la referencia de Estrasburgo y su influencia en los tribunales internos de cada Estado no sólo en Europa como también en América.

Importa destacar que la Corte Interamericana no es un tribunal penal y no sustituye acciones relativas a violaciones cometidas en los Estados. Este tribunal tan sólo juzga si el Estado es o no responsable por violaciones de los derechos humanos dictados por la Convención Americana de Derechos Humanos. En caso de que el Estado sea considerado responsable por tal violación, la consecuencia es la obligación de hacer que cese la violación y el deber de indemnizar a las víctimas o a sus herederos. Así, se concluye que las sentencias de la Corte Interamericana tienen un carácter de reparación, además de obligatorias e inapelables²⁹.

²⁶ Artículo 62 de la Convención Americana

²⁷ Op. cit. Prólogo del presidente de la Corte de 2001

²⁸ GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. op. cit. p.162

²⁹ CARVALHO RAMOS. op. cit. Pág. 94

III- LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA VIDA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

La palabra vida, en su concepción lingüística tiene un significado objetivo, puesto que en los diccionarios de diversas lenguas dice casi lo mismo. Según la definición del diccionario de la Real academia Española, *vida* del latín *Vita* significa: “fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser que la posee. Estado de Actividad de los seres orgánicos. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte”³⁰. El derecho a la vida es, antes que nada, el derecho a la propia existencia fisiológica y biológica. Este es un concepto puramente naturalístico, según lo cual, *Vida* equivale a *ser humano vivo*.

Según la explicación del profesor Massini Correas, el derecho a la vida, que debe ser interpretado como el derecho a la inviolabilidad de la misma, tiene su fundamento o justificación racional en el principio de la dignidad³¹. El sentido primordial de este derecho es el de impedir que el Estado, de manera arbitraria, arrebatase la vida a cualquier persona o legalice o autorice la muerte de esta de forma arbitraria; se trata, por lo tanto de una obligación de no hacer en cabeza del Estado. Este concepto – tradicional - ha evolucionado, pues la tendencia actual es la de incluir la obligación positiva, rescatando el principio de la dignidad humana como parte del derecho a la vida.

A pesar de la unanimidad demostrada en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos al reconocer y garantizar el derecho a la vida, no por ello dejan de presentarse, a nivel doctrinal e incluso normativo, innumerables debates. Estas discusiones se encuentran motivadas por tres peculiaridades de este derecho: a) es la base ontológica de todos los otros derechos, b) su violación es irreversible ya que implica la desaparición de su titular. c) la propia definición de “vida” genera conflictos entre conceptos éticos, morales y religiosos, lo que alimenta debates como los sostenidos sobre la eutanasia, el aborto y el suicidio asistido³². A pesar de los debates que se desarrollan en la actualidad, puede afirmarse la existencia, independientemente del territorio³³, de un derecho a la protección jurídica de la vida, reconocido como un derecho humano tanto a nivel estatal como internacional.

³⁰ Para el diccionario de la Lengua portuguesa “Aurélio”, “la vida es un estado incesante de la actividad funcional, vitalidad, animación, actividad.” Traducción libre hecha por la autora.

³¹ MASSINI, Carlos I Correas. El Derecho a la vida en la sistemática de los Derechos humanos. En: *Problemas Actuales sobre Derechos humanos. Una Propuesta filosófica*. Coord. Javier Saldaña. UNAM. México, 2000. Pág. 161

³² REY MARTÍNEZ, Fernando. *La Protección de la vida, un derecho en transformación y expansión* (artículo 2 y Protocolo 6). Artículo pendiente de publicación.

³³ En este sentido, entramos en la tesis de la flexibilización de la Soberanía en los casos de violación de los derechos humanos. Según enfatiza Flávia Piovesan, a partir de la internacionalización de los Derechos humanos, se ve rota la noción de Soberanía Nacional Absoluta, en la medida que se admiten intervenciones en el plano interno, en pro de la protección de los derechos humanos. Se preuncia el fin de la era en que la forma por la cual el Estado trataba sus ciudadanos, se consideraba como un problema estrictamente de jurisdicción doméstica. PIOVESAN, Flávia. *Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional*. 4ª Edição. Ed. Max Limonad, 2000. Pág. 302. Sin embargo, creemos que esta relatividad de la soberanía sólo debe ser hecha para la protección del derecho a la persona y respetando las normativas internacionales de diplomacia, porque la Soberanía Territorial prevalece en todos los casos.

El primer instrumento a ser considerado como expresión de la voluntad universal de protección de los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948), el que reconoce en su artículo III el Derecho a la Vida:

“Art. III: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

La formulación de este precepto fue acertada, puesto que enfatizó la universalidad de los derechos humanos, siendo fiel al dictado de su preámbulo sobre el reconocimiento del principio de la dignidad intrínseca en todos los demás derechos. Este artículo está vinculado con el noveno artículo del mismo instrumento, que prohíbe la violación del derecho a la vida arbitrariamente. Así, la condición necesaria para que todos los demás derechos sean efectivos, es la realización del derecho a la vida, y de ahí la necesidad de su efectiva protección por el Estado Democrático. Sólo la protección del derecho a la vida deja la posibilidad de gozar de todos los demás derechos³⁴.

La Declaración a pesar de ser enfática, no era obligatoria ni vinculante, por ello no se mostraba muy eficaz, lo que impulsó a la elaboración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos³⁵ que ha venido a dar la fuerza jurídica vinculante y obligatoria a los preceptos ya dictados por la Declaración de 1948. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, al analizar este tratado, ha advertido la necesidad de considerar el derecho a la vida como un derecho universal y supremo del ser humano, dictando que este derecho “no puede ser comprendido de modo restrictivo, y que su protección requiere que los Estados adopten medidas positivas para la protección de este derecho”³⁶.

En el mismo año y con el mismo sentido de la Declaración Universal de los Derechos humanos, en el Sistema Regional Americano de protección de los derechos humanos, fue

³⁴ Este mismo pensamiento explicita José Carlos Remotti al mencionar que “el derecho a la vida es prerequisite de los demás derechos humanos, los cuales carecen de sentido si no se garantiza la vida. El derecho a la vida no sólo implica el no ser privado arbitrariamente de ella, sino que también comprende la garantía de que la vida se desarrolle de forma digna.”. REMOTTI, José Carlos. *La Corte Interamericana de Derechos humanos. Estructura, funcionamiento y jurisprudencia*. Instituto Europeo de Derechos humanos. Barcelona. España. 2003. p. 370

³⁵ A la vez, se instauró el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominando los derechos de segunda y tercera generación. Aquí el derecho a la vida es mencionado en el artículo 11, en el cual se menciona que toda persona tiene el **derecho a tener un nivel adecuado de vida**, término que será plenamente analizado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el sentido de adecuar el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos.

³⁶ General Comment 6. Comité de Derechos Humanos de la ONU. (A/37/40). En el texto original en inglés se lee: *Moreover, the Committee has noted that the right to life has been too often narrowly interpreted. The expression "inherent right to life" cannot properly be understood in a restrictive manner, and the protection of this right requires that States adopt positive measures. In this connection, the Committee considers that it would be desirable for States parties to take all possible measures to reduce infant mortality and to increase life expectancy, especially in adopting measures to eliminate malnutrition and epidemics.*

aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo I. prevé que “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la integridad de su persona”. Una declaración muy importante para la época pero que carecía de fuerza jurídica, lo que no ocurrirá en las convenciones de derechos humanos. A estas Declaraciones siguieron las Convenciones regionales de protección Americana y Europea, que establecen el derecho a la vida básicamente como una negación de la privación arbitraria de esta, o sea, ejemplifica que la vida de una persona no puede ser atacada indiscriminadamente, salvo en el caso de la pena de muerte prevista por ley³⁷.

El Pacto de San José de Costa Rica es más extenso que la mayoría de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, pues contiene 82 artículos y codifica más de 2 docenas de derechos diferentes y, según el primer párrafo de su Preámbulo, tiene como propósito “consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”³⁸. El objeto legal del artículo 4 del Pacto de San José³⁹ es la protección del derecho a la vida. Pero dicho artículo, después de definir de un modo general ese propósito, dedica los cinco siguientes párrafos a lo que se refiere a la aplicabilidad de la pena de muerte, lo que ha suscitado muchas discusiones por parte de los Estados que lo han ratificado.

Por su parte, el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, dispone que “nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por el tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena”. En Europa, este sentido inicial de intentar legitimar la pena de muerte no suscitó demasiados problemas en sus trabajos preparatorios, pero fue

³⁷ Del contexto, entendemos que “arbitrariamente” debe entenderse sin una causa legalmente justificada, o sea, contraria al derecho. Por ejemplo, los países que conservan la pena de muerte, al aplicarla, no se está privando de la vida “arbitrariamente”, sino en cumplimiento de una pena transitada según un juicio legal, ante un tribunal competente y dando al acusado su pleno derecho a tener una defensa íntegra.

³⁸ Primer párrafo del Preámbulo de la Convención Americana de Derechos humanos

³⁹ La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, dicta en su artículo 4 el siguiente concepto tradicional del derecho a la vida: “Art. 4. Derecho a la vida.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte ésta sólo podrá imponerse por los delitos mas graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca la pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente
3. No se reestablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidas en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiende de decisión ante autoridad competente.”

perdiendo vigor debido a la explícita evolución abolicionista de la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa. Fue este el motivo para que el 28 de abril de 1983 se firmara el Protocolo N°. 6 relativo a la pena de muerte, cuyo contenido sólo prevé la posibilidad de la utilización de la condena máxima por actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra. No obstante, el giro copernicano llegó con la entrada en vigor del Protocolo N° 13, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, firmado a 1 de enero de 2003. Con esta medida, los Estados miembros del Consejo de Europa ha dado un paso más hacia la creación de una zona totalmente libre de pena de muerte⁴⁰.

En América se ha dado también pasos, a través del sistema regional de protección de derechos humanos, para la abolición de la pena de muerte. En 1983 la Corte Interamericana dictó una opinión consultiva OC - 3/38 del 8 de septiembre de 1983 a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio de la cual interpretó el art. 4.2 de la Convención Americana determinando el alcance de la norma de protección del derecho a la vida en el continente americano. El problema que originó esta decisión se originó cuando el Gobierno de Guatemala, al ratificar la Convención, estipuló una reserva al artículo 4, ya que la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 54 solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los políticos⁴¹. La Corte, además de resolver las controversias acerca de la interpretación de la reserva hecha por Guatemala al ratificar la Convención, invocando el artículo 64 del Pacto de San José y el artículo 75 de la Convención de Viena⁴², designó el sentido y la interpretación que se debía tener sobre el artículo 4 y sus párrafos.

Según la Corte, es necesario precisar el sentido y alcance de las disposiciones del artículo 4 de la Convención, en especial de sus párrafos 2 y 4, y las posibles conexiones que

⁴⁰Estados Partes: Andorra, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Georgia, Hungría, Irlanda, Liechtenstein, Malta, Portugal, Reino Unido, Rumania, San Marino, Suecia, Suiza y Ucrania.

Países que lo han firmado pero no lo han ratificado: Albania, Alemania, Austria, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Checa y Serbia y Montenegro.

⁴¹ El problema jurídico concreto que se ha planteado la Comisión es si una reserva concebida en los términos citados, puede ser invocada por un Estado Parte para imponer la pena de muerte a delitos que no la tenían prevista para la fecha de la ratificación y, en particular, si se puede alegar, como lo venía haciendo el Gobierno de Guatemala ante la misma Comisión, para fundamentar la aplicación de la pena capital, a delitos comunes conexos con los políticos que no la acarreaban anteriormente. Texto extraído de la Opinión consultiva OC - 3/38 del 8 de septiembre de 1983. www.corteidh.or.cr

⁴² En efecto, el artículo 75 de la Convención remite en materia de reservas a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según el cual se define la reserva como "una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado " (artículo 2.d). Pero, la Corte enfatiza que la Convención Americana no es un simple tratado Internacional donde están en relieve los intereses de los Estados, sino un Tratado diferencial donde el único interés es de proteger a los ciudadanos de estos Estados, por eso la Corte ofrece un método judicial alternativo de carácter consultivo con el único fin de ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso.

guardan éstos entre sí, de las cuales dependerá la posibilidad de relacionar el efecto de reserva de uno con el texto del otro. Para hacerlo utiliza los criterios de interpretación consagrados en la Convención de Viena, que pueden considerarse reglas de derecho internacional general sobre el tema. Así concluyó que la reserva hecha por Guatemala al ratificar la Convención, se fundamentaba en el hecho de que "la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 54, solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con los político". Con esto simplemente se señala una realidad del derecho interno. No puede deducirse de la reserva que la Constitución de Guatemala imponga la pena de muerte a delitos comunes conexos, sino únicamente que no la prohíbe. Para la Corte, el análisis del régimen de la pena de muerte, permitida dentro de ciertos límites por el artículo 4, plantea problemas relativos a medida en que es posible restringir el goce y el ejercicio de los derechos y libertades garantizados por la Convención, así como el alcance y sentido de la aplicación de tales restricciones, pone de relieve que este artículo debe ser interpretado según el artículo 29 y 30 de la propia Convención⁴³, indicando el claro propósito de la Convención de extremar las condiciones en que sería compatible con ella la imposición de la pena de muerte en los países que no la han abolido. Además, la Convención Americana expresa una clara nota de progresividad, que consiste en, sin llegar a abolir la pena de muerte, adoptar las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que ésta se vaya reduciendo hasta su supresión final.

Esta opinión de la Corte ha culminado con la presentación del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción – Paraguay en fecha de 06 de agosto de 1990, en el cual los países que lo ratificaron se comprometieron en no aplicar tal condena en sus territorios⁴⁴. Sin embargo, a pesar del gran compromiso de la Corte Interamericana por analizar la problemática de la protección del derecho a la vida, indicando que este derecho humano fundamental comprende un *principio sustantivo* en el que toda persona tiene un derecho inalienable a que su vida sea respetada, y un *principio procesal* en el cual ninguna

⁴³ Artículo 29. Normas de Interpretación. "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a. permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza".

Artículo 30. Alcance de las Restricciones: " Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas".

⁴⁴ Hasta la fecha, los países que ratificaran el Protocolo fueran: Venezuela, Uruguay, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Brasil y Chile. Brasil ha hecho una reserva al protocolo al momento de ratificarlo, declarando que por motivos constitucionales si aplicará la pena de muerte en tiempo de guerra a delitos sumamente graves de carácter militar. Datos retirados de la página de la Comisión: <http://www.cidh.org/basic.esp.htm>.

persona pueda ser privada arbitrariamente de su vida, se percibe que los instrumentos internacionales de protección demuestran una visión restrictiva y tradicional de la protección del derecho a la vida. Pero, este concepto empieza a evolucionar a partir del momento en que la Corte empieza a emitir sus pareceres y adopta el Protocolo para la Abolición de la Pena de Muerte y cuando el Comité de la ONU comenta el Pacto de Derechos civiles y políticos.

La prohibición de privar a una persona arbitrariamente de su vida es, entonces el punto basal de la protección de este derecho, que irá evolucionando con el pasar del tiempo y con las nuevas formulaciones de los Tratados Internacionales, las innovaciones en las Constituciones internas de los países democráticos y las con las construcciones de la jurisprudencia de las Cortes. El giro copernicano –cambio de paradigma- sobre la protección al derecho a la vida entendido de forma integral, universal e indivisible, surge en los instrumentos de protección elaborados tras la adopción del Convenio de Viena de 1993, que son: la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de personas⁴⁵ y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém do Pará"⁴⁶ de 9 de junio de 1994. Estos dos tratados demuestran firmemente el carácter de indivisibilidad dictado por las Convenciones de Teherán y de Viena, elementos rescatados en la Jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos.

IV- LA INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.

La ampliación del concepto de vida, como derecho ha estado vinculada al cambio que se ha operado en el tratamiento de los derechos conocidos como de “segunda generación, es decir los derechos económicos, sociales y culturales. Algunos factores pueden ser destacados como propulsores de esta transformación y el consecuente reconocimiento de la importancia de la indivisibilidad de los derechos humanos en el sistema Interamericano.

⁴⁵ El gran legado de esta Convención fue la de subrayar que el delito de desaparición forzada viola muchos otros derechos y no sólo la libertad, de ahí la posibilidad de que la Corte Interamericana pueda interpretar de manera amplia el derecho a la vida. En conformidad con el artículo XX de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, su entrada en vigor para los Estados ratificantes se efectuó el trigésimo día a partir de la fecha en que se depositó el segundo instrumento de ratificación, o sea, el 29 de marzo de 1996. Para los demás Estados que la hayan ratificado, su entrada en vigor será el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. Hasta el momento los países signatarios son: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Pero, los Estados que ya la ratificaran son: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay. Datos Retirado de la web: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html>

⁴⁶ Esta Convención también adoptada el 9 de junio de 1990, enfatiza la obligación positiva del Estado en la protección del derecho de la mujer a vivir sin violencia. Sus previsiones legales son muy claras y precisas al exponer el derecho de la mujer a la protección jurídica de su vida. El Preámbulo de esta Convención subraya que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Lo que demuestra la necesidad del ejercicio del principio de la indivisibilidad de los derechos humanos en lo que concierne a vivir con dignidad.

La Conferencia de Teherán⁴⁷ de 22 de abril a 13 de mayo de 1968 fue el primer marco para este cambio, al declarar que los derechos humanos deben ser protegidos de forma interrelacionada e indivisible. Este planteamiento ha podido desarrollarse tras el fin de la Guerra Fría, que para muchos autores fue determinante, ya que permitió el inicio de una etapa de consolidación y reafirmación de los derechos humanos como un asunto global.⁴⁸ Esta primera conferencia fue precedida, en 1993, por la Conferencia de Viena⁴⁹, donde se consagró, definitivamente, la indivisibilidad de los derechos humanos⁵⁰ y se declaró su

⁴⁷ Esta Conferencia proclamó la superación de la competencia nacional exclusiva, la aserción de la capacidad internacional de las organizaciones internacionales e hizo con que aumentase el reconocimiento de la capacidad de los individuos, además fue logrado la firma de ochenta y cuatro países, lo que puso un punto final “teórico” a la visión compartimentada de los derechos humanos. El artículo 13 de la Proclamación de Teherán enfatiza que: “(...) una vez que los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles, la plena realización de los derechos civiles y políticos es imposible sin el gozo de los derechos económicos, sociales y culturales”.

⁴⁸ Para Flávia Piovesan, el fin de la Segunda guerra Mundial significó la revolución en el proceso de internacionalización de los derechos humanos y el Fin de la guerra Fría ha significado la consolidación y reafirmación de los derechos humanos como tema global. PIOVESAN, Flavia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional* Ed. Maxlimonad .2000.p.234. (traducción hecha por el autor). En el mismo sentido ver: LINDGREN ALVES, *Os direitos humanos como Tema Global*. Perspectiva y fundação Alexandre de Gusmão. 1994.

⁴⁹ Los principales objetivos de esa Conferencia de Viena eran examinar y evaluar los avances de los derechos humanos; identificar los medios por los cuales se puede superar obstáculos, examinar la relación entre el desarrollo y derechos humanos; examinar los medios para volver más efectiva la implementación de los tratados, evaluar la eficacia de los métodos ya existentes y elaborar las recomendaciones acerca de la eficacia de los tratados de derechos humanos.

Esa conferencia fue marcada por su gran complejidad teniendo presente la cantidad de países y de organizaciones no gubernamentales que participaron y el difícil momento histórico marcado por un intenso déficit económico, por el crecimiento de la pobreza y por la explosión de varios conflictos internos en muchos países. La compleja realidad contemporánea y la difícil tarea de realizar los principios de los derechos humanos en sociedades con distintas tradiciones culturales y características económicas y sociales propias fueron objeto de reflexión en la declaración y en el programa de Acción de Viena.

Ante tales dificultades, la Conferencia de Viena logró enfatizar una dimensión horizontal en los medios de coordinación, sistematización y eficacia de los múltiples mecanismos de protección existentes. Esta dimensión horizontal se refiere al sentido de la no existencia de jerarquía entre los múltiples instrumentos de protección a los Derechos humanos; y la dimensión vertical es referente al intercambio entre instrumentos internacionales y de derecho interno. Y en una dimensión vertical, logró la incorporación de las medidas nacionales de implementación de los mismos instrumentos de protección de los derechos humanos, y el fortalecimiento de las instituciones nacionales directamente vinculadas a la plena vigencia de estos derechos. CANÇADO TRINDADE, A.A. A Proteção Internacional dos direitos humanos ao final do Século XX. In: Mariano, B.D e Fecho Filho, F. (orgs) A Proteção Nacional e Internacional dos Direitos Humanos: Seminário de Brasília: FIDEH, 1994. Pág. 107

Esa conferencia profundizó en la obligatoriedad de la protección de los derechos en su totalidad como una obligación erga omnes, además, reafirmó la legitimidad de la preocupación de la comunidad internacional ante la violación de estos derechos, dejando expreso la afirmativa de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

⁵⁰ Artículo 5 de la Declaración y Programa de acción de Viena: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

fuerte ligación con la democracia, al afirmar categóricamente que la democracia, el desarrollo y los derechos humanos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Otro factor importante fue el fin de las dictaduras en América Latina y el restablecimiento de la democracia en el continente en la década de los 80 y principios de los 90. Fruto de este cambio en el continente es la Declaración de Asunción firmada en 1990, resultado de la reunión de la Asamblea General de la OEA en esta ciudad. En esta declaración se insiste en la democracia representativa como el único sistema político adecuado para garantizar los fines y propósitos de la OEA, incluso en lo que concierne al respeto a los derechos humanos.

Los anteriores factores han influido en la forma como se perciben los derechos humanos en los países americanos. Es así que el 17 de noviembre de 1988, fue firmado el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador, que busca el desarrollo de acciones destinadas a eliminar la profunda brecha generada por la desigualdad socio-económica y la pobreza vivida por estos países. La firma, y la entrada en vigor el 16 de noviembre de 1999, del Protocolo de San Salvador, tras la ratificación de once Estados-Parte, muestra la dificultad de los países americanos en la aceptación por sus leyes internas de los tratados internacionales, pero también demuestra la voluntad de los Estados americanos de cambiar su situación social y económica⁵¹. Este protocolo adicional según se deduce de su Preámbulo, enfatiza que “los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, así mismo reafirma su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”.

Sin embargo, es importante observar que, en materia de derechos económicos culturales y sociales, las demandas individuales y de casos especiales sólo pueden ser presentadas ante el sistema interamericano cuando se trate de violaciones de derechos de asociación sindical y de educación⁵². Pese a tal limitación diversas organizaciones que trabajan para que las demandas alcancen el sistema interamericano se valen de la estrategia de presentar casos que, a pesar de referirse formalmente a una violación de derechos civiles y políticos -, como en los casos de desapariciones forzadas -, presentan también situaciones de violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta situación se corrobora perfectamente en las sentencias de reparación de la Corte Interamericana al analizar los pedidos hechos por la Comisión Interamericana.

En los últimos diez años, se han experimentado grandes cambios en lo referente al tratamiento de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que significa una mayor preocupación en la protección de los derechos humanos como un todo. Este cambio de mentalidad fue evolucionando en la propia Corte Interamericana, puesto que la gran mayoría de los casos demandados ante la Corte aún se referían a los derechos civiles y

⁵¹ Países que han ratificado o adherido al Protocolo de San Salvador hasta la fecha: Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Méjico, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Brasil, Colombia, Surinam.

⁵² Artículo 19 (6) del Protocolo de San Salvador.

políticos de la víctima, y que según la propia Corte, también incluía la violación de los derechos económicos y sociales del demandante.

V- LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA REFERENTE AL DERECHO A LA VIDA Y SU EVOLUCIÓN⁵³

Las violaciones al derecho a la vida son una dura realidad de los países americanos que resiste al paso del tiempo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla uno de los papeles más importantes en la lucha contra estas violaciones. Los casos conocidos por la Corte Interamericana referentes al derecho a la vida siempre han sido analizados conjuntamente con la violación de otros derechos. Esto se debe al hecho de que para la Corte la efectividad de la protección al derecho a la vida es un prerequisite a la protección de otros derechos. Así, intentaremos en este trabajo, analizar de forma exhaustiva pero selectiva los principales casos de violación del derecho a la vida decididos por la Corte.

Con el fin de mejorar la exposición de los casos a ser analizados hemos establecido una división más bien didáctica sin la preocupación del lapso temporal entre cada caso. Es conveniente advertir que la Corte, hasta el momento sólo ha llevado a cabo proceso en contra de Estados, por violaciones cometidas por sus agentes. No hay, y caben serias dudas de que ello sea posible, proceso contra actores no estatales, como podrían ser grupos guerrilleros. La división de casos que se ha elaborado los clasifica en las siguientes categorías:

A) Uso por el Estado de la Condena Máxima: Pena de Muerte; B) Casos de Desapariciones Forzadas, en los cuales se hará una subdivisión, en la que enfatizaremos los puntos más relevantes de la sentencias: 1) La obligación del Estado de proteger la vida: Obligación Negativa y Positiva; 2) El Uso desproporcionado de la fuerza y la prohibición de la Auto amnistía; 3) La Ampliación del Concepto de Vida; 4) La dignidad en la vida y en la Muerte; 5) El desarrollo del nuevo concepto del derecho a la protección jurídica de la vida: Nivel adecuado de Vida y Proyecto de Vida; y C) Las Sentencias de Reparación como instrumento de garantía de la protección jurídica de la vida.

Esta clasificación nos servirá de marco para el estudio del desarrollo en la interpretación del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la efectividad en la aplicación de los principios de la Indivisibilidad y Dignidad Humana en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así que verificaremos que la evolución del concepto de derecho a la protección jurídica de la vida pasa a relacionarse con las necesidades básicas del ser humano para vivir con dignidad.

⁵³ Todas las informaciones referentes a las sentencias del CIDH fueran retiradas de la página Web de la Corte: www.corteidh.or.cr

A- El uso por el Estado de la condena máxima: Pena de Muerte

En 1969, cuando se redactaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no tuvo éxito el esfuerzo concertado para incluir una provisión que hubiera prohibido absolutamente la pena capital, puesto que la Corte Interamericana tuvo que dar su opinión acerca de la interpretación del artículo 4 referente a la prohibición de la pena de muerte en varias ocasiones, como por ejemplo en la Opinión consultiva OC - 3/38 del 8 de septiembre de 1983 debido a una reserva hecha por Guatemala referente al artículo 2 y 4.4 del Pacto de San José.

Hay que destacar que la Corte Interamericana en todo momento utilizó medios jurídicos para restringir la aplicación de tal pena siendo influenciada por la propia Convención Americana. El cambio sólo aparecería con la firma del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, que fue aprobado en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA (Asunción, Paraguay, 1990). Este instrumento abole la pena de muerte a lo largo de todo el hemisferio mediante la ratificación del Protocolo por los Estados partes.

El Caso Hilarie, Constantine y Benjamín y otros (sentencia de 21 de junio de 2002), destaca por la contribución específica en lo que concierne a la decisión de la Corte acerca de la incompatibilidad de una ley nacional del Estado de Trinidad y Tobago con el artículo 4º, párrafos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta sentencia acumula los casos independientes que ya fueron sometidos a la Corte separadamente⁵⁴, por eso la sentencia es muy exhaustiva ya que engloba el caso de 32 víctimas y la violación de diversos artículos de la Convención Americana. Resultan particularmente interesantes las denuncias, relativas a la violación del artículo 4 de la Convención, que sucedieron debido a la condena de las víctimas a una pena de muerte obligatoria prevista por ley. Todas las víctimas fueron juzgadas y declaradas culpables por homicidio intencionado en Trinidad y Tobago y condenadas a morir en conformidad con la Ley de delitos contra la persona, vigente en el Estado a partir del 3 de abril de 1925.

Esta ley establece la pena de muerte como la única condena aplicable en casos de delitos de homicidio intencionado. Según el Juez Sergio García Ramírez, esa ley nacional es incompatible con el artículo 4, párrafos 1 y 2 de la Convención Americana. Esto implica, a la luz del artículo 2 del Pacto de San José, que el Estado debe adoptar las medidas

⁵⁴ La acumulación fue ordenada por la Corte Interamericana mediante Resolución de fecha 30 de noviembre de 2001, de conformidad con el artículo 28 de su Reglamento. En esa Resolución la Corte tomó en consideración, entre otros aspectos de la cuestión, que las partes en los Casos *Hilaire, Constantine y otros* y *Benjamín y otros* eran las mismas, es decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Trinidad y Tobago. Asimismo, la Corte consideró que el objeto era esencialmente idéntico en los tres casos, en el sentido de que todos estos se relacionaban con las garantías del debido proceso en supuestos de imposición de “pena de muerte obligatoria” a todas las personas condenadas por el delito de homicidio intencional en Trinidad y Tobago, siendo las únicas diferencias las circunstancias individuales de cada caso. Y finalmente que, los artículos de la Convención Americana que se alegaban como violados en cada caso eran fundamentalmente los mismos. Corte I.D.H., Casos *Hilaire, Constantine y otros* y *Benjamín y otros*, Resolución de 30 de noviembre de 2001.

pertinentes, en la especie, medidas legislativas, puesto que la violación se localiza en un acto de esta naturaleza, que a su turno determina otros actos, para conformar su orden interno con las estipulaciones de la Convención Americana⁵⁵.

Lo cierto es que el artículo 4.6 de la Convención, ubicada bajo el epígrafe del “Derecho a la vida”, que es la materia de protección en el conjunto del artículo, señala que “toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos (...)”⁵⁶.

La Corte estimó una múltiple violación, en el caso de los artículos 4.6 y 8, en relación con el 1.1 de la Convención Americana, puesto que la ineficacia absoluta de la petición de amnistía, indulto o conmutación puede analizarse desde dos perspectivas: por una parte, como violación del derecho a la vida en los términos del precepto que contiene la facultad; y por otra, como violación del debido proceso, ya que en la tramitación de la solicitud no hubo audiencia, pruebas, ni tampoco alegaciones que diesen la menor posibilidad de acceder al fin solicitado.

Por otra parte, la Corte asumiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos⁵⁷, concluyó que el llamado corredor de la muerte implica un tratamiento cruel e inhumano, lo que no se puede relacionar con lo que predica la Convención Americana sobre el derecho a la dignidad⁵⁸.

B- Casos de Desapariciones Forzadas

La desaparición forzada ha sido interpretada como una vulneración al derecho a la vida por la Corte Interamericana, que ha determinado que constituye un incumplimiento de la obligación estatal de garantizar el derecho a la vida de modo preventivo y eficaz.

⁵⁵ Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez en el caso *Hilaire, Constantine, Benjamín y otros. Trinidad y Tobago*, del 21 de junio de 2002.

⁵⁶ La doctrina enfatiza que tal exigencia no puede entenderse como un mero formalismo, sino que debe establecerse un procedimiento adecuado, imparcial y eficaz que guarde relación con las reglas del debido proceso. Remotti, José Carlos Carbonell. *La Corte Interamericana de Derechos humanos. Estructura, Funcionamiento y jurisprudencia*. Instituto Europeo de Derechos. Barcelona. España. 2003. pág. 372

⁵⁷ La Corte Europea determinó en el *Caso Soering vs. Reino Unido* que el llamado “fenómeno del corredor de la muerte” (*death row phenomenon*) es un trato cruel, inhumano y degradante, y está constituido por un periodo de detención prolongado en espera y previo a ejecución, durante el cual se sufre de angustia mental además de otras circunstancias a las que el acusado es expuesto que incluyen, entre otras, la forma en que se impuso la condena, como por ejemplo: las condiciones de detención a la espera de ejecución; las demoras en las apelaciones o en la revisión de su pena de muerte durante las cuales la persona está sujeta a una tensión extrema; el hecho de que el juez no tome en consideración la edad o el estado mental de la persona condenada, así como la constante espera de lo que será el ritual de su propia ejecución⁵⁷. Casos *Hilaire, Constantine y otros y Benjamín y otros*, de 30 de noviembre de 2001, párrafo 167.

⁵⁸ En el presente Caso, todos los detenidos se encuentran bajo una constante amenaza de que en cualquier momento pueden ser llevados a la horca como consecuencia de una legislación y proceso judicial contrarios a la Convención Americana. Según el informe presentado por la perito Gaietrey Pargass, el procedimiento previo a la muerte en la horca de los sentenciados por el delito de homicidio intencional aterroriza a los prisioneros y los deprime, varios no pueden dormir debido a que sufren pesadillas y menos aún comer. Casos *Hilaire, Constantine y otros y Benjamín y otros*, de 30 de noviembre de 2001. párrafo 168.

La desaparición forzada del individuo constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y desafortunadamente, en los países latino-americanos no es una novedad, ya que fue una práctica muy extendida en los años setenta, durante las épocas de las dictaduras. Dicha práctica tiene por objetivo no sólo la desaparición momentánea de determinadas personas, sino también crear un estado generalizado de temor e inseguridad en la sociedad.

Entre 1987 y 1989 la historia de las desapariciones forzadas en América Latina se empezó a escribir de la mano de la justicia. En esos años fueron juzgados los casos de las desapariciones forzadas de los ciudadanos hondureños Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz, en procesos que concluyeron con sendas sentencias condenatorias emitidas el 29 de julio de 1988 y el 20 de enero de 1989, respectivamente. La sentencia del Caso Velásquez se considera un marco, porque por vez primera, un Estado americano fue condenado por un órgano judicial internacional después de su debido proceso.

Tras estas dos sentencias, vinieron otros casos en los que se notan los primeros cambios de la jurisprudencia de la Corte en lo que refiere a la interpretación ampliada del artículo 4 de la Convención Americana, pero desafortunadamente, las violaciones por desaparecimientos en los países americanos no dejaron de existir.

No obstante, se verifica una ampliación en la protección jurídica de la vida en las sentencias de la Corte Interamericana expedidas después de los años 90, ya con la adopción en 1994 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Esta Convención, además de dar una definición de lo que se considera desaparición forzada, conllevó importantes cambios en los ordenamientos internos de los países parte, ya que establece la imposibilidad del Estado de eximir de responsabilidad a ninguna persona en virtud de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Además, este instrumento estipula que los presuntos responsables sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar, no admitiendo privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en tales procesos⁵⁹.

Es importante señalar que según la propia Convención Interamericana sobre desaparición de personas, se considera como atenuante al delito tipificado el hecho de que la persona desaparecida aparezca con vida, o el que quienes hayan participado en los actos que contribuyeron para su desaparición suministren informaciones que permitan esclarecer datos acerca de la suerte de persona⁶⁰. La intención de esta Convención es esencialmente la protección de la vida, pues en un Estado donde las dificultades internas son mayúsculas, el simple hecho de que una persona que tenga múltiples derechos

⁵⁹ Art. IX CICDFP

⁶⁰ Art. XI CICDFP

fundamentales violados, obtenga la protección de la vida, ya es un punto positivo a pesar de no ser el más adecuado⁶¹.

Destacamos que la división de los casos de desapariciones forzadas analizados en este apartado se hizo con el propósito de dar relieve a los aspectos que más llaman la atención sobre la evolución del ejercicio de la Corte en la obligatoriedad y ampliación del artículo 4 de la Convención Americana. Por ello, sin la intención de menospreciar todos los otros aspectos de las sentencias, nos atenemos a los hechos donde se demuestran la evolución de la protección jurídica de la vida practicados por la Corte Interamericana.

1) La Obligación del Estado de proteger la vida: Obligación Positiva y Negativa.

Caso Velásquez Rodríguez

Esta es la primera sentencia de la Corte, por lo que constituye una referencia para las demás acerca del tema de desapariciones forzadas. Este caso fue demandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Honduras, a 24 de abril de 1986. Los hechos que motivan la denuncia son referentes a la violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal) y 7 (derecho a la libertad) del Pacto de San José, contra el Sr. Manfredo Velásquez Rodríguez. Esta persona fue privada de su libertad de forma violenta, sin orden judicial, por miembros de las fuerzas armadas del Estado de Honduras, desapareciendo sin dejar rastros.⁶² Después de dos años de análisis de documentos y tras oír las versiones de los testigos, el Estado Hondureño fue condenado por la violación de los artículos anteriormente citados, y principalmente, por no haber garantizado el pleno deber de prevención a la no violación de los derechos consagrados por la Convención.

Semejante a los demás casos de desaparición forzada sentenciados por la Corte a finales de los años 80, éste fallo representa el primer paso a la ampliación del concepto del derecho a la vida por no concebir este derecho de forma restrictiva, exigiendo de los Estados la obligación positiva de tomar todas las providencias necesarias para proteger y preservar la vida. En esta misma línea están los Casos Godínez Cruz contra Honduras, y el caso Aloeboetoe y otros.

⁶¹ Hay que tener en mente que el delito de desaparición forzada de personas viola múltiples derechos humanos fundamentales, incluso o principalmente el derecho a la vida, por eso al atenuar la condena por el simple hecho de que la víctima aparezca con vida o que los responsables suministren datos acerca del delito, a nuestro entender no es la mejor manera de se intentar acabar con tal práctica.

⁶² La Corte destaca en la sentencia que sin duda el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar seguridad. Tampoco se puede discutir que toda la sociedad padece por las violaciones a su orden jurídica. Pero, por más graves que sean ciertas acciones y por más culpables que pudiesen ser los culpables de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ser ejercido sin ningún límite o que el Estado pueda valerse se cualquier procedimiento para attingir sus objetivos, sin sujeción al derecho o la moral. Ninguna actividad del Estado puede ser fundamentada sobre el o desprecio a la dignidad humana. **La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocido por la Convención y que los Estados están obligados a respetar y garantizar.** Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. (grifo del autor)

2) El uso desproporcionado de la fuerza por agentes del Estado y la Prohibición de la Auto amnistía:

a) Caso Neira Alegría y Otros.

Con la Sentencia del Caso Neira Alegría y otros, denunciado por la Comisión ante la Corte, con fecha de 31 de julio de 1991, por la violación del Estado Peruano de los artículos: 1 (Obligación de Respetar los Derechos), 5 (derecho a la integridad personal), 4 (Derecho a la Vida), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 27 (suspensión de garantías) de la Convención, la Corte da continuidad a lo dictado en la opinión consultiva de 1983, sobre la obligatoriedad positiva del Estado de protección al derecho a la vida.

Según la denuncia presentada ante la Comisión, el 18 de junio de 1986, Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar se encontraban detenidos en el establecimiento penal San Juan Bautista, conocido como “El Frontón”, en calidad de procesados como presuntos autores del delito de terrorismo. Agrega la Comisión que, como consecuencia del amotinamiento producido en ese penal en la fecha indicada, mediante Decreto Supremo N° 006-86 JUS, el Gobierno delegó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el control de los penales y el Penal San Juan Bautista quedó incluido en las llamadas “Zonas Militares Restringidas”. Y por último, que desde el día en que las Fuerzas Armadas procedieron a debelar los motines, estas personas habían desaparecido y sus familiares no habían vuelto a verlos ni a tener noticias suyas; aunque no se descartaba hasta la fecha la posibilidad de que continuasen con vida⁶³.

La obligación de proteger el derecho a la vida bajo el artículo 4.1 del Pacto de San José, el cual estipula que “*nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente*”, excluye, como es obvio, los procesos legales aplicables en los países que aún conservan la pena de muerte. Pero, en el caso que nos ocupa, el análisis que debe hacerse tiene que ver, más bien, con el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del orden⁶⁴. A pesar de que el Informe demuestra claramente que en esta cárcel los presos estaban muy agresivos y llevaban armas, ha quedado demostrado que el Gobierno, al incumplir con su obligación de proteger la vida humana, dio órdenes que tuvieron como consecuencia un injustificado número de muertos, lo que en concepto de la Corte constituye una violación a la obligación de proteger la vida humana. Además, la comisión investigadora del Congreso del Perú dice que “*del resultado logrado se infiere, sin embargo, la desproporción del potencial bélico*

⁶³Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de 19 de enero de 1995, párrafo 2

⁶⁴Para resolver esta colisión de derechos la Corte ha mencionado en casos anteriores que: “está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”. (Caso Velásquez Rodríguez, *supr.* 63, Párr. 154 y Caso Godínez Cruz, *supra* 63, Párr. 162).

empleado. La demolición final, luego de la rendición producida a las 14:30 horas del día diecinueve, no tendría explicación lógica y en consecuencia sería injustificada”⁶⁵.

La Corte, de este modo, sentenció que de las circunstancias que rodearon la rebelión en el Penal San Juan Bautista, sumado al hecho de que ocho años después de lo ocurrido no se habían tenido noticias del paradero de las tres personas desaparecidas, y al empleo desproporcionado de la fuerza por el Estado, se desprende la conclusión razonable de que las personas fueron realmente privadas arbitrariamente de su vida con la violación del artículo 4.1 de la Convención⁶⁶. La Corte, por lo tanto, reconoce que pese a la existencia de un derecho y un deber, en cabeza del Estado, de mantener la legalidad y del orden interno, incluso aún con el uso de la fuerza, este derecho no puede implicar la violación de la obligación de proteger la vida; fin de todo Estado Democrático. Esta obligación de proteger la existencia de sus ciudadanos se hace aún más exigente ante las personas que se hallan privadas de su libertad, ya que se encuentran bajo la tutela del propio Estado.

b) Caso Gangaran Panday

El Caso Gangaran Panday⁶⁷ es muy curioso por tratarse de un caso en que la Corte desestimó la petición de la Comisión por responsabilizar el Gobierno de Surinam por la muerte de Asok Gangaram Panday. La Comisión, sometió el caso a consideración de la Corte Interamericana el 27 de agosto de 1990, según los hechos que se exponen a continuación⁶⁸:

La denuncia presentada ante la Comisión el 17 de diciembre de 1988, por el señor Leo Gangaram Panday, hermano del fallecido, y quien estaba presente cuando ocurrió el hecho; se refiere a la detención y posterior muerte del señor Asok Gangaram Panday en Surinam. Según el denunciante, el señor Asok Gangaram Panday fue detenido por la Policía Militar de Surinam cuando llegó, proveniente de Holanda, al Aeropuerto Zanderij de Paramaribo. Éste, habiendo sido supuestamente recluido bajo el alegato de que ameritaban investigarse las razones de su expulsión de dicho país, fue, acto seguido, depositado en una celda dentro de un albergue para deportados, situado en la Brigada Militar en Zanderij. Posteriormente la Policía Militar de Fort Zeelandia, donde se hallaba detenido, informó que se había ahorcado.

⁶⁵ Caso Neira Alegría, Sentencia de 19 de enero de 1995, párrafos 62 y 74.

⁶⁶ Caso Neira Alegría, Sentencia de 19 de enero de 1995, párrafo 76. Además, en la Sentencia de Reparaciones de 19 de septiembre de 1995, la corte declaró que existe la necesidad de reparación, aunque no sea posible la *restitutio in integrum* en caso de violación del derecho a la vida estipulando las indemnizaciones por daño material y moral. Párrafo 38

⁶⁷ La Comisión sometió este caso ante la Corte contra Surinam en perjuicio del señor Choeramoenipersad Gangaram Panday (conocido también como Asok Gangaram Panday) por violación de los artículos 1 (Obligación de respetar los derechos), 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 4.1 (Derecho a la vida), 5.1 y 2 (Derecho a la integridad personal), 7.1, 2 y 3 (Derecho a la libertad personal) y 25.1 y 2 (Protección judicial) de la Convención. Caso Gangaram Panday. Sentencia de 21 de enero de 1994

⁶⁸ Datos retirados de la propia sentencia del Caso Gangaram Panday.

El 21 de diciembre de 1988 la Comisión solicitó al Gobierno información acerca de las circunstancias que rodearon la muerte de la presunta víctima, y solamente el 2 de mayo de 1989 el Gobierno informó sobre las gestiones realizadas para investigar las circunstancias de la detención. Agregó que efectivamente Asok Gangaram Panday, según la autopsia, se había suicidado. Pero hubo una segunda autopsia que indicaba que había muerto por asfixia sin que fuera posible atribuir la responsabilidad por su deceso. La tercera autopsia dictaminó muerte por violencia.

Ante estas contradicciones la Corte solicitó informes sobre una evaluación técnica de todos los elementos probatorios, pero no fue posible obtener respuestas contundentes, puesto que la Corte no pudo determinar la veracidad de la denuncia. En consecuencia la Corte desestimó los cargos por tortura y muerte de la víctima, fijado la responsabilidad del Estado sólo por la detención arbitraria. Sin embargo, importa destacar los votos disidentes de los jueces Picado Sotela, Aguiar-Aranguren y Cançado Trindade, quienes declararon que a su criterio a partir del momento en que la Corte estableció, aún por inferencia, la responsabilidad del Estado demandado, por detención ilegal del señor Gangaram Panday, era necesario que se aceptara las consecuencias que dicha determinación conlleva en cuanto a la protección del derecho a la vida de la víctima⁶⁹. Además, los Jueces enfatizaron que:

“El derecho a la vida y su garantía y respeto por los Estados no puede ser concebido de modo restrictivo. El mismo, no sólo supone que a nadie se le puede privar arbitrariamente de la vida (obligación negativa). Exige de los Estados, todavía más, tomar todas las providencias apropiadas para protegerla y preservarla (obligación positiva). La protección internacional de los derechos humanos, en relación con el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene una dimensión preventiva en donde el deber de debida diligencia asume, en los casos de detención ilegal, connotaciones más severas. Esta, la debida diligencia, impone a los Estados el deber de una prevención razonable en aquellas situaciones -como ahora en el *sub iudice*- que pudieran conducir, incluso por omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida.”⁷⁰

Este salvamento de voto señala el inicio del cambio de mentalidad dentro de la propia Corte Interamericana por la necesidad de una protección integral de la vida del ser humano.

c) Caso Barrios Altos

Otro caso que nos interesa es el caso Barrios Altos, en el cual la Corte condenó el Estado de Perú por el uso desproporcionado de la fuerza y también por la utilización de leyes de auto-amnistía. Es decir, leyes que concedían la amnistía a todos los funcionarios militares, policías o civiles que pudiesen estar envueltos en procesos de violaciones de los derechos humanos cometidos entre 1980 y 1995, incluso aunque no hubiesen sido denunciados.

⁶⁹ Voto disidente referente a la Sentencia de 21 de enero de 1994. Párrafo 2

⁷⁰ *Ibidem*. Párrafos 3 y 4

La CIDH decidió que Perú era responsable por todas las desapariciones y además ordenó la reapertura de las investigaciones judiciales acerca de los hechos, una reparación integral a los familiares de las víctimas, la derogación de la Ley n° 26479, que concedía la amnistía general al personal militar, policial y civil implicados en casos de violaciones de los derechos humanos, y de la Ley n° 26492, que aumentaba el alcance de la ley anterior.

En el caso en cuestión, la Corte, por primera vez, además de admitir la responsabilidad internacional del Estado demandando, también estableció las consecuencias jurídicas en el sentido de que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de la prescripción y establecimiento de excluyentes de responsabilidad que intenten impedir las investigaciones, y la sanción de los responsables por violaciones de los derechos humanos. El juez Cançado Trindade en su voto concurrente enfatizó que:

“(…) estas ponderaciones de la Corte Interamericana constituyen un nuevo y gran salto cualitativo en su jurisprudencia, en el sentido de buscar superar un obstáculo que los órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos todavía no han logrado transponer: la impunidad, con la consecuente erosión de la confianza de la población en las instituciones públicas. Además, atienden a un clamor que en nuestros días es verdaderamente universal. Recuérdese, al respecto, que el principal documento adoptado por la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993) exhortó a los Estados a “derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, (...) y sancionar esas violaciones (...)”⁷¹.

Además según el juez, la doctrina contemporánea en materia de reparaciones de violaciones de derechos humanos ha establecido la relación entre el derecho a la reparación, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia (que comienza por el acceso a la justicia), - derechos estos cuya realización se ve obstaculizada por medidas de derecho interno (tales como las llamadas autoamnistías atinentes a violaciones de los derechos humanos) que conducen a una situación de impunidad⁷². En este sentido, cabe distinguir entre las llamadas “autoamnistías”, expedidas en favor de quienes ejercen la autoridad y por éstos mismos, de las amnistías que resultan de un proceso de pacificación con sustento democrático y alcances razonables, que excluyen la persecución de conductas realizadas por miembros de los diversos grupos en contienda, pero dejan abierta la posibilidad de sancionar hechos gravísimos, que ninguno de aquellos aprueba o reconoce como adecuados⁷³.

⁷¹ Voto Concurrente del Juez A. A. Cançado Trindade. Sentencia de 14 de marzo de 2001.

⁷² Voto Razonado del Juez Antonio Augusto Cançado Trindade. Sentencia de Reparación - Caso Castillo Páez, 2001

⁷³ Las Autoamnistías han sido severamente cuestionadas. Por ejemplo en la obra de: NORRIS, ROBERT E, *Leyes de impunidad y los derechos humanos en las Américas. Una respuesta legal*, en “Revista IIDH”, no. 15, enero-junio 1992, esp. pp. 109 y ss. Retirado del Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez. Sentencia de Reparación - Caso Castillo Páez, 2001.

3- La Ampliación del Concepto de Víctima:

El Caso Panel Blanca (Paniagua Morales y Otros)⁷⁴ también es de fundamental importancia para la comprensión de la obligación positiva del Estado de proteger la inviolabilidad del derecho a la vida. El fallo amplía el concepto de víctima, al condenar a Guatemala a pagar reparaciones por daño moral a los hermanos de las víctimas directas de homicidios y desapariciones forzadas, sin que fuera necesario demostrar la existencia de una relación afectiva, bastando la consanguinidad. Esta decisión señala los esfuerzos de la Corte por establecer una reparación integral del daño.

En su voto razonado, el Juez De Roux señaló que tanto el uso de presunciones razonables (que admiten prueba en contrario) como, la inclusión de los hermanos de la víctima dentro de la órbita de las personas a las que se supone afectadas por los homicidios y otros hechos de similar gravedad, corresponden a la evolución del derecho comparado en materia de derecho de la responsabilidad. Asegura que el caso objeto de estudio acoge, en buena hora, a esa evolución del derecho comparado, en función de la protección de la persona humana y en procura de alcanzar una reparación integral del daño de que se trata⁷⁵.

4- La dignidad en la Vida y en la Muerte

Otra sentencia significativa acerca de la protección del derecho a la vida es la del **Caso Bámaca Velásquez** de 25 de noviembre de 2000, que de manera innovadora la Corte Interamericana introduce en la construcción de su jurisprudencia la importancia del respeto a los restos mortales del individuo, y principalmente la discusión acerca del género humano y el vínculo entre vivos y muertos. Según la denuncia, Efraín Bámaca Velásquez desapareció en 12 de marzo de 1992, después de un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla que se produjo en la Aldea de Montúfar, en la región oeste de Guatemala. Las fuerzas armadas encarcelaron al Sr. Bámaca Velásquez, 2 secretamente en varias dependencias militares donde le torturaron y le ejecutaron⁷⁶.

Siguiendo la línea de jurisprudencia marcada con anterioridad, la Corte enfatizó en la sentencia la obligatoriedad de la protección positiva por parte del Estado, y señaló que si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes al Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción⁷⁷.

Este fue el primer caso sometido ante la Corte Interamericana sobre desaparición forzada de personas en el cual fue considerada la cuestión de la falta de respeto a los restos mortales de la víctima y el sufrimiento que esto causa a sus familiares. Según expone el juez Cançado Trindade en su voto razonado de la sentencia, lo mismo ha ocurrido en

⁷⁴ Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 1998, párrafo 1.

⁷⁵ Voto Razonado del Juez Roux De Rengifo. Sentencia de Reparaciones de 2002.

⁷⁶ *Idem*, párrafo 18,

⁷⁷ *Ibidem*, párrafo 174.

otros casos de violación al derecho a la vida, como el caso Neira Alegría de 1995, el cual no se logró identificar los restos mortales de las víctimas, y declara que “la negligencia y la falta de respeto con los restos mortales de las víctimas- desaparecidas o no – de violaciones de derechos humanos, y la imposibilidad de reverlos, en varios casos ante la Corte referentes a Estados distintos, me parece configurar un *malaise* de nuestros tiempos, lo que revela la espantosa pobreza espiritual del mundo deshumanizado en el que vivimos”.

En el presente caso llama la atención la oposición sistemática del poder público a las exhumaciones (párr. 121.m) y la incapacidad del Estado de ubicar los restos mortales de la víctima, con la consecuente impunidad de los responsables por las violaciones de los derechos humanos en perjuicio del Sr. Bámaca Velásquez así como de sus familiares. En un momento determinado de su testimonio ante esta Corte, la Sra. Jennifer Harbury señaló que “lo que busca es justicia y que le devuelvan los restos de Efraín Bámaca Velásquez”, su esposo (Párr. 93(b)), lo que demuestra la relación entre la vida y la muerte, es decir, tanto una cuanto otra deben ser vistas y realizadas de forma digna.

5- El desarrollo del nuevo concepto del derecho a la protección jurídica de la vida: Proyecto de vida y Condición adecuada de vida.

El caso que demuestra claramente el inicio de la evolución y ampliación del concepto del derecho a la vida es el caso Villagrán Morales y otros contra el Estado de Guatemala, más conocido como el caso de los niños de la calle. Los hechos apuntan que en la época en que sucedieron tales atrocidades, existía en Guatemala un patrón común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales, en contra de los niños de la calle; esta práctica incluía amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos, e incluso homicidios, que tenían como propósito contrarrestar la delincuencia y la vagancia juvenil. Ante estos hechos probados, la Corte Interamericana al condenar al Estado guatemalteco señaló que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerequisite para el disfrute de todos los demás derechos humanos, por lo que al ser vulnerado resta sentido a los demás derechos. Además, enfatizó que, en esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.

En este caso la Corte dicta una nueva forma de vislumbrar el ejercicio de la protección jurídica del derecho a la vida, al ejemplificar que cuando los Estados violan los derechos de los “niños de la calle”, los hace víctimas de una doble agresión. La primera es la evidente, ya que atenta contra su integridad física, psíquica y moral, y contra su propia vida. La segunda es la de no evitar que los niños sean lanzados a la miseria, privándoles de unas condiciones mínimas de vida digna e impidiéndoles el pleno desarrollo de su personalidad; a pesar de que está claro y es evidente, que el Estado tiene la obligación de fomentar las condiciones para garantizar su derecho a alentar un proyecto de vida que sea cuidado y desarrollado en su beneficio⁷⁸.

⁷⁸ Caso Villagran Morales y Otros. Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párrafo 191.

C- Las Sentencias de Reparación como instrumento de garantía y ampliación del Derecho a la protección jurídica de la vida.

Un paso más en la ampliación por vía jurisprudencial del concepto de protección jurídica a la vida fue dado por la Corte en 1997. En la sentencia de reparaciones del **Caso Loyaza Tamayo**, la Corte decidió indemnizar la demandante por la destrucción de su *proyecto de vida*.

Según los hechos narrados por la Comisión, en el día 6 de febrero de 1993 la profesora universitaria Maria Helena Loyaza Tamayo fue arrestada por miembros de la división Nacional contra el terrorismo (DINCOTE) de la policía nacional de Perú, en Lima. La detención se llevó a cabo sin el orden judicial y se basó en informaciones prestadas por terceros, que aseguraban que la señora Tamayo era colaboradora del grupo *Sendero Luminoso*. La víctima permaneció durante 10 días sin comunicación siendo torturada, además de violada y obligada a confesar su vinculación con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Así, después de estos 10 días, la Sra. Tamayo fue presentada ante la prensa con el uniforme de encarcelada y le fue imputado el crimen de traición. Después de varios juicios llevados a cabo por el Tribunal sin rostro, la profesora fue condenada a 20 años de cárcel. Según la Corte, este Tribunal sin rostro no respetada el derecho a un Tribunal imparcial, y estableció que el habeas corpus no podía ser suspendido por leyes internas, ni siquiera ante situaciones anómalas o de emergencia.

La Corte condenó el Estado de Perú por la violación de los artículos 7,5, y 8 de la Convención. En la sentencia de reparación, al pronunciarse acerca de la indemnización, la Corte argumentó que la víctima había sufrido daños a su proyecto de vida. Este consiste en la realización integral de la persona, de modo que su frustración implica un perjuicio diferente al contemplado por el daño emergente y el lucro cesante. La frustración del proyecto de vida no corresponde a la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño emergente”, y tampoco puede confundirse con el concepto de “lucro cesante”, puesto que éste se refiere de forma exclusiva a la pérdida de ingresos económicos futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos. El “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas”,⁷⁹ por lo que se trata de un concepto que se asocia a la realización personal; esta, a su vez, se sostiene en las opciones que el sujeto tiene para conducir su vida y alcanzar su destino⁸⁰. Al condenar, injustamente a una persona a dos décadas en la cárcel el Estado ha frustrado arbitrariamente la posibilidad de realización integral de la persona, alterando de forma sustancial su desarrollo individual, por lo que debe compensarla de alguna manera.

⁷⁹ *Idem*

⁸⁰ *Ibidem*, párrafo 148.

En el mismo sentido se encuentra la sentencia de reparación del **caso Cantoral Benavides** en la cual la Corte Interamericana determinó que la vía más idónea para restablecer el proyecto de vida de la víctima consistía en que el Estado le proporcionase una beca de estudios superiores o universitarios. Esta indemnización busca atender la realización integral de la persona afectada y efectuar una real reparación. Este caso fue sometido ante la Corte en 8 de agosto de 1996, y en la sentencia de 18 de agosto de 2000 fue decidido que el Estado de Perú violó los artículos 1, 2, 5, 7, 8, y 9 de la Convención Americana en perjuicio de Luís Alberto Cantoral Benavides.

El caso Cantoral Benavides también se refiere al abuso de poder del gobierno de Perú. Según los relatos, el 6 de febrero de 1993, el señor Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido arbitrariamente y torturado por agentes de seguridad de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) de la Policía Nacional del Perú; y fue procesado ante la Justicia Militar del Perú por el delito de traición a la patria; siendo condenado por el Tribunal sin rostro a 20 años de cárcel. Agotados los recursos internos, la demanda fue propuesta ante la Corte Interamericana. En el momento de su detención la víctima tenía 20 años y realizaba sus estudios en la Universidad Nacional de San Marcos, en Perú. Él se quedó encarcelado por 4 años, siendo sometido a torturas y a tratamientos crueles y degradantes, lo que le dejó con secuelas físicas y psicológicas. Fue liberado en 1997, cuando abandonó el país por temer por su seguridad, y desde 1998, vive en Brasil.

La Corte sentenció que el proyecto de vida de Luis fue destruido por el Estado y que este tenía que repararle dándole una indemnización por los trastornos que le impidieron realizar su vocación⁸¹. Cabe observar que la Corte Interamericana, al emitir sus fallos acerca de la reparación del proyecto de vida, fue cuidadosa al enfatizar que ni todas las lesiones al proyecto de vida merecen ser indemnizadas, es necesario que se trate de un daño mayor con amplia trascendencia. Pero, es evidente que la reparación por la violación al proyecto de vida es un gran salto cualitativo en la jurisprudencia de la Corte.

CONCLUSIONES

La vida es el mayor bien del que goza todo ser humano. Es un derecho que no puede verse afectado, en ningún caso, por razones ajenas a la propia voluntad. Es decir que el disfrute o goce de este derecho es inherente a toda persona y no puede estar sujeto a privaciones. Por ello es evidente que para poder disfrutar de una vida digna se requiere una serie de condiciones básicas que un Estado Democrático de Derecho está obligado a proporcionar y a mantener.

⁸¹ La reconstrucción del proyecto de vida de la víctima se encuentra íntimamente relacionada con su educación profesional, y debe ser garantizada por el Estado sin exigir para ello el retorno de Luis Alberto al Perú, pues no está en condiciones psicológicas para hacerlo. En consecuencia, solicitan una cantidad similar a la compensación del daño moral, de US\$80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América), como indemnización por pérdida del proyecto de vida, suma que, dada la juventud y potencialidad de la víctima, garantizaría sus estudios y su permanencia en el Brasil. Para dicha estimación no se utilizó una valoración en equidad, sino un criterio más objetivo basado en el cálculo de una serie de gastos específicos relacionados con la reubicación de la víctima en el ámbito académico y su rehabilitación psicológica. Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 3 de Diciembre de 2001, párrafo 54.

Esta es la máxima de todos los instrumentos internacionales y nacionales analizados en este estudio. La verdadera evolución de los derechos fundamentales, desde la Constitución alemana hasta las convenciones más especiales como la de protección del niño o de la mujer, demuestra la importancia del principio de la indivisibilidad y universalidad de los derechos de la persona humana.

Es exactamente la búsqueda de la máxima protección y mayor efectividad posible del derecho a la vida que, basándose en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se verifica una ampliación del concepto del derecho a la vida, ya que se defiende la conexión entre el derecho a la vida con el nivel adecuado de vida, y la noción del proyecto de vida. Lo que determina el cambio de mentalidad, es decir, el derecho a la vida no más estaría exclusivamente en la categoría de los derechos civiles y políticos. El concepto tradicional naturalístico del derecho a la existencia evoluciona hasta el punto de exigirse la determinación de la vida digna, también como un derecho económico y social.

No obstante, desafortunadamente, vemos que un sistema de protección de los derechos humanos totalmente eficaz aún está lejos de ser una realidad, pero el cambio empieza a producirse. La efectividad de la Comisión y de la Corte Interamericanas en el ejercicio los preceptos internacionales de protección de los derechos humanos ya supone un gran salto; que realmente se culminará el día en que todos los países del continente americano ratifiquen el Pacto de San José y acepten la jurisdicción de la Corte. Así que concluimos que la evolución y ampliación del derecho a la protección jurídica de la vida pasa por tres etapas fundamentales dentro del sistema interamericano de derechos humanos: los casos de desapariciones forzadas en los que la Corte presenta la obligación positiva o negativa del Estado, los casos que incorporan el concepto de proyecto de vida y los casos que defienden las condiciones mínimas para tener una vida digna, es decir, el deber del Estado de satisfacer las necesidades mínimas del ser humano para que estos vivan con total dignidad.

Las sentencias de la CIDH acerca de los casos de desaparición forzada han hecho que algunos países reflexionen sobre las consecuencias de la violación de los derechos humanos ejecutadas por sus servidores públicos, funcionarios o sujetos que guarden cualquier relación con el Estado⁸². La jurisprudencia de la CIDH se sostiene en el fundamento de que es el Estado, y no sólo sus agentes, individualmente, participan en la Convención y son titulares sujetos pasibles de responsabilidades y obligaciones.

En los párrafos 1º y 2º del Pacto de San José se resaltan la obligación del Estado en respetar, asegurar y remediar las violaciones de derechos consagrados por la

⁸² Según Sergio García Ramírez: *Reviste particular importancia precisar quién es el sujeto comprometido por las normas convencionales internacionales, de las que proviene la responsabilidad internacional y al que atribuyen por lo tanto los deberes reparatorios que trae consigo la violación de los derechos fundamentales. (...) conviene advertir que el derecho internacional entiende que la responsabilidad internacional de los Estados puede surgir como consecuencia de los actos u omisiones de cualquiera de sus órganos (...)*. GARCÍA, Sergio Ramírez. Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana. Inst. Investigaciones Jurídicas. UNAM. México 2002. párrafo 106

Convención⁸³ y enseña que la violación debe ser reparada conforme su naturaleza, tomando en cuenta el agente estatal que la cometió⁸⁴. De este modo también ha sido objetivo de la Corte la lucha contra la impunidad⁸⁵, cuyo objetivo es asegurar que los responsables por los abusos y violaciones de los derechos humanos sean procesados, punidos criminalmente y alejados de sus cargos⁸⁶. En el mismo sentido, ha surgido en la Corte Interamericana el asunto de las “leyes de auto amnistías” que son totalmente contrarias a los dispositivos de la Convención Americana. La CIDH, en varias sentencias⁸⁷, dictó que las leyes de este carácter son inadmisibles, por tratarse de excluyentes de responsabilidad de los agentes del Estado, lo que culmina con la legalización interna de actos de violación de derechos humanos que son contrarios tanto a la constitución interna del Estado “dicho” democrático cuanto con la Convención Americana⁸⁸.

Además, se percibe que los casos de desapariciones forzadas analizados y fallados por la Corte Interamericana de Derechos humanos, antes de la asignatura de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, han contribuido para que la protección de los derechos humanos se ampliara, principalmente en lo que concierne el derecho a la vida, dado a la nueva interpretación del artículo 4 de la Convención Americana.

Esta nueva manera de interpretar el artículo 4 empieza a verse a partir del momento en que este derecho pasa a ser considerado de una forma más amplia y no restrictivamente. La Corte, en varias sentencias, como en las anteriormente mencionadas, considera que el derecho a la vida no basta con la teoría de que nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente, sino que también exige que el Estado tome todas las medidas necesarias para que este derecho sea protegido y preservado, lo que demuestra una obligación

⁸³ El artículo 1º del Pacto de San José está formulado sobre la epígrafe: “Obligación de Respetar los derechos”, y el artículo 2º figura sobre el “Deber de adoptar disposiciones de derecho interno”.

⁸⁴ Las violaciones a los derechos humanos puede venir de cualquier órgano estatal: del ejecutivo, de órganos judiciales y de actos del legislativo. De este último se verifica norma que colisiona con el dictado por la Convención. La CIDH, en su opinión consultiva de 16 de diciembre de 1994, señaló que “*la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la convención constituye una violación a esta y que, en el evento de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado*”. Opinión consultiva OC-14/94. párrafo 50.

⁸⁵ Impunidad ha sido definida por la CIDH como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”. Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 1998. párrafo 173.

⁸⁶ PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito constitucional Internacional*. Ed. Max Limonad. Brasil. 2000. Pág. 268.

⁸⁷ Así, en el Caso Loyaza Tamayo. Sentencia de Reparaciones de 1998, párrafos 168 y 170; Caso Castillo Páez. Sentencia de Reparaciones de 1998. párrafo 105; Caso Barrio Altos. Sentencia de 2001, párrafos 41-44.

⁸⁸ En este sentido afirma Sergio García Ramírez, que “del modo en que los tribunales internos de constitucionalidad revisan las leyes para verificar su congruencia con la Constitución nacional, los tribunales internacionales lo hacen para verificar su conformidad con el orden internacional, en el que residen los valores esenciales para la humanidad.” GARCÍA, Sergio Ramírez. *Los Derechos humanos y la jurisdicción Interamericana*. UNAM. México. 2002. Pág. 110

positiva resaltada por los jueces Picado Sotela, Agiar- Araguran y Cançado Trindade en sus votos disidentes en el caso Gangaram Panday de 1994 contra el Estado de Surinam⁸⁹. Por lo tanto, a pesar de que los casos de desapariciones forzadas de personas son todavía un problema actual en los países americanos, los fallos dictados por la Corte Interamericana han desarrollado una nueva forma de interpretar el artículo 4 del Pacto de San José, una manera más amplia fundada en el principio de la dignidad humana y en la teoría de la indivisibilidad de los derechos humanos⁹⁰.

La noción de proyecto de vida⁹¹ ha sido introducida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana con la sentencia de reparaciones del caso Loyaza Tamayo, iniciando un nuevo porvenir en la protección del derecho a la vida y ampliando las discusiones doctrinales sobre el tema. Este tema tan novedoso ha cambiado el término de reparación normalmente utilizado por los tribunales internos e internacionales, puesto que la Corte Interamericana reconoció que existen otras formas de reparar la violación cometida.

La CIDH, al igual que otros tribunales internacionales, ha hecho evolucionar los conceptos de daño reparable, a fin de consolidar el sistema de protección eficaz de los derechos humanos. Esta evolución tiene que ver con el rescate y la ampliación del alcance del principio de la dignidad humana⁹² que ha hecho con que las reparaciones fuesen vistas desde otro prisma con la firme finalidad de preservar la vida digna y salir al paso de las consecuencias de las conductas violatorias de los derechos humanos⁹³.

La reclamación de daño al “proyecto de vida” se refiere a la autorrealización plena de la persona y no sólo su relación con el patrimonio. Por eso, la Corte al dictar sus resoluciones reparatorias se ha deparado con tres vertientes: la estrictamente patrimonial⁹⁴, la que no reviste esta naturaleza, o sea, la no patrimonial, y la que decide obtener reparaciones de otro carácter, ya que en casos de violaciones del derecho a la vida es muy difícil conseguir una reparación ideal como la *restitutio in integrum*, la cual

⁸⁹ Caso Gangaran Panday. Sentencia de 21 de enero de 1994. párrafo 2.

⁹⁰ Las decisiones de la Corte Interamericana sobre los casos de desapariciones forzadas pueden considerarse como el primer paso para la ampliación y evolución del derecho a la vida.

⁹¹ El concepto de proyecto de vida está vinculado a la satisfacción como una modalidad de reparación. El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. Caso Loyaza Tamayo. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Párrafo 148.

⁹² La Corte al exponer su propia concepción sobre la materia de reparaciones, sostuvo que la reparación por daño al proyecto de vida ciertamente no corresponde a la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en los daños emergentes.

⁹³ En el mismo sentido, interesante enfatizar que estas violaciones no sólo entrañan los efectos que regularmente son visibles por los juzgadores o de la propia víctima, sino también de otros no tan perceptibles, pero no por ello menos lesivos para la persona afectada. La misma línea que existe para reparar un daño material, por ejemplo, también debe ser seguido para reparar un daño no tan evidente. Esta es la evolución de las sentencias de reparación de la CIDH. GARCÍA. Sergio Ramírez. *Dos Temas de la jurisprudencia Interamericana: “Proyecto de vida y Amnistía”*. In. Estudios Jurídicos. México. UNAM. Instituto de Investigaciones jurídicas, 2000.

⁹⁴ Para el Juez Sergio García Ramírez, el primer caso o la reparación estrictamente patrimonial, se localiza en la reparación de daños – materiales y morales – y la compensación de los perjuicios sufridos por la víctima, que son la culminación de un proceso jurídico-causal, en el que se funda la obligación reparatoria. *Ibidem*. Pág.351

consiste en el restablecimiento de la situación anterior. Cabe observar, que la Corte Interamericana al tratar de dar sus fallos acerca de la reparación del proyecto de vida, fue cuidadosa al enfatizar que no basta cualquier lesión al proyecto de vida, es necesario que se trate de un daño mayor con amplia trascendencia⁹⁵. Pues el mero reconocimiento de una violación o daño no sirve para hacerse una reparación de esta magnitud.

Aunque la violación del proyecto de vida se considere por la Corte como un daño a ser reparado, al igual que los daños material o moral, en lo que concierne a la indemnización pecuniaria acerca de tal daño, fue pasible de contradicciones ideológicas, puesto que en el Caso Loyaza Tamayo la Corte no dictó una obligación económica a cargo del Estado por el daño al proyecto de vida de la víctima, aunque sí había ocurrido tal violación⁹⁶. Ya en el Caso Cantoral Benavides, sí existió una indemnización pecuniaria referente al daño al proyecto de vida en forma de beca universitaria para mantener los estudios de Luis Alberto Cantoral⁹⁷.

A partir de estas sentencias de reparación, se verifica la evolución del derecho a la protección jurídica de la vida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que incorporó los elementos necesarios para que exista un sentido de vida digna relacionado siempre con la plena realización de la persona humana, reafirmando el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos y dando eficacia a los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás instrumentos de protección a estos derechos.

El derecho a tener un nivel de vida adecuado o condiciones mínimas de vida digna fue primeramente consagrado por la Declaración Universal de los Derechos humanos⁹⁸ y

⁹⁵ Así lo enfatizó el Juez Carlos Vicente de Roux Rengifo: “No toda modificación de las condiciones de existencia merece ser indemnizada. Debe tratarse de cambios de mucha entidad, que trastoken a fondo, por ejemplo, el marco afectivo y espiritual en que se desenvuelve la vida de la familia, o trunquen una evolución profesional que ha consumido grandes esfuerzos y empeños. Por otra parte, al estimar la alteración de las aludidas condiciones de existencia y, más en particular, el daño al proyecto personal de vida, deben evitarse ciertos extremos, como creer que la víctima permanecerá atrapada para siempre en la inmovilidad y la desesperanza, o darle aval a una suerte de tragedia eterna. Este aspecto de la cuestión debe ser especialmente tenido en cuenta al momento de fijar, en equidad, el monto de la respectiva indemnización”. Voto Parcialmente Disidente. Caso Loyaza Tamayo. Sentencia de Reparaciones de 27 de noviembre de 1998.

⁹⁶ La Corte reconoce la existencia de un grave daño al “proyecto de vida” de María Elena Loayza Tamayo, derivado de la violación de sus derechos humanos. Sin embargo, la evolución de la jurisprudencia y la doctrina hasta la fecha no permite traducir este reconocimiento en términos económicos, y por ello el Tribunal se abstiene de cuantificarlo. Advierte, no obstante, que el acceso mismo de la víctima a la jurisdicción internacional y la emisión de la sentencia correspondiente implican un principio de satisfacción en este orden de consideraciones. Caso Loyaza Tamayo. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Párrafo 153

⁹⁷ Estimó la Corte que la vía más idónea para restablecer el proyecto de vida de Luis Alberto Cantoral Benavides consiste en que el Estado le proporcione una beca de estudios superiores o universitarios, con el fin de cubrir los costos de la carrera profesional que la víctima elija. Caso Cantoral Benavides. Reparaciones. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Párrafo 80

⁹⁸ El artículo 25, en su primer párrafo, establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los

asegurado por una propuesta de los países Latinoamericanos en respuesta al fenómeno indigno de la pobreza.

La extrema pobreza en la que millares de personas viven no es sólo incompatible con lo que dicta los principales instrumentos de protección a los derechos humanos, sino que representa la total negación de efectividad de todos los derechos⁹⁹.

Aunque las sentencias de la Corte Interamericana no hacen alusiones explícitas, en lo que concierne al derecho a un nivel adecuado de vida, sus resoluciones sobre el proyecto de vida van de encuentro al significado de este derecho. El proyecto de vida es consustancial al derecho a la existencia y requiere para su desarrollo condiciones de vida digna, de seguridad e integridad de la persona humana.

Esta noción fue dictada primeramente en el Caso de los “niños de la Calle” o Villagrán Morales y otros, cuando la Corte enfatizó que “cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como “los niños de la calle”, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándoles así de unas condiciones mínimas de vida digna e impidiéndoles el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad¹⁰⁰.

En los últimos años se han deteriorado notoriamente las condiciones de vida de amplios segmentos de la población de los Estados Partes en la Convención Americana y una interpretación del derecho a la vida no puede hacer abstracción de esta realidad. El derecho al nivel adecuado de vida o condiciones mínimas de vida está incluido, convencionalmente, en el grupo de los derechos económicos, sociales y culturales, pero esta claro que al estudiarse el contenido de la noción del nivel adecuado de vida, que significa que la persona humana debe tener la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas y vivir con dignidad, se verifica el entrelazamiento de todos los derechos humanos fundamentales; lo que imposibilita hablar de divisiones¹⁰¹.

En este sentido, creemos que la pobreza extrema verificada en los países latinoamericanos no sólo viola los derechos económicos y sociales, sino que efusivamente viola el propio derecho a la vida, puesto que éste engloba la existencia humana con dignidad y la satisfacción de las necesidades mínimas para se vivir.

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

⁹⁹ A pesar de que el derecho a condiciones dignas de vida aparece en la Declaración Universal de los Derechos del hombre, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, no se encuentra expreso en el Protocolo de San Salvador o cualquier otro instrumento regional americano. Sin embargo, todos los instrumentos interamericanos mencionan derechos y garantías que componen la noción básica de un nivel de vida adecuado.

¹⁰⁰ Caso Villagrán Morales y otros. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. párrafo.191

¹⁰¹ Adopta y defiende esta vertiente el Juez de la Corte Interamericana Antonio Augusto Cançado Trindade que en una entrevista enfatizó que rechaza la tesis de generaciones: “..., *creio que o próprio direito fundamental à vida é de primeira, segunda, terceira e de todas as gerações. É civil, político, econômico-social e cultural.. Os direitos se ampliam, e os novos direitos enriquecem os direitos anteriores*”. Retirado de la entrevista del Cançado Trindade en la V Conferência Nacional de Direitos Humanos . Dia 25 de maio de 2000 Câmara dos Deputados, Brasília, DF. Retirado de la página web: <http://www.dhnet.org.br/> Fecha: 10/03/2004

De este modo, verificamos que las decisiones contenciosas de la Corte Interamericana hace hincapié en el hecho de que más que garantizar el nacimiento de un ser humano, el Estado tiene la obligación de proveer las condiciones adecuadas que le asegure una vida con dignidad y el desarrollo de su proyecto de vida. Ya no basta con protegerlos contra la violación arbitraria del derecho a la vida, que también es muy importante, principalmente en los países Latinoamericanos, sino que es imprescindible la obligación positiva del Estado en la preservación de la vida y en la garantía de condiciones dignas de existencia.

Por último, cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce el papel primordial de influenciar la legislación y jurisprudencia nacionales de los Estados-parte de la Convención Americana. En este sentido, es necesario precisar, que la Corte además de ser el instrumento por excelencia en la protección y salvaguarda los Derechos Humanos en el continente americano, posee un carácter transformador que incide en la mentalidad y en el quehacer de los tribunales, parlamentos o congresos nacionales, y hasta mismo en el ejercicio de las autoridades administrativas; actuando de fuera hacia dentro y desempeñando el papel de marco ensanchador e instrumento de tutela de los derechos humanos en este continente.

ANEXO JURISPRUDENCIAL POR MATERIAS

1. Pena de Muerte: Caso Hilarie Constantine y otros: Serie C No. 94. Sentencia de 21 de junio de 2002. Considera el corredor de la muerte como un trato inhumano y degradante.
2. Desapariciones forzadas
 - 2.1 Las obligaciones positiva y negativa del Estado en la protección jurídica de la vida:
 - a) Caso Velásquez Rodríguez: Serie C No. 4. Sentencia de 29 de julio de 1988. Considerado un marco porque por primera vez un Estado es condenado por la Corte Interamericana. Por primera vez no se percibe a la vida de modo restrictivo.
 - 2.2. El uso desproporcionado de la fuerza por el Estado y la prohibición del auto amnistía.
 - a) Caso Neira Alegría y Otros: Serie C No. 20. Sentencia de 19 de enero de 1995. La condena del Estado por la desproporción en el uso de la fuerza policial.
 - b) Caso Gangaran Panday: Serie C No. 16. Sentencia de 21 de enero de 1994. La necesidad de ver a la vida de modo integral.
 - f) Caso Barrios Altos: Serie C No. 75. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Fue establecida la relación entre el derecho a la reparación y los derechos a la verdad y a la justicia.
 - 2.3 La ampliación del concepto de víctima
 - a) Caso Panel Blanca (Paniagua Morales y Otros): Serie C No. 37. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Indemnización a los hermanos de las víctimas.
 - 2.4 La Dignidad en la vida y en la muerte

- a) Caso Bámaca Velásquez: Serie C No. 70. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. La condena del Estado por la falta de respeto a los restos mortales de las víctimas.
- 3. Casos de desaparición forzada en los que se verifica la ampliación del nuevo concepto del derecho a la protección jurídica de la vida: aparecen los conceptos de proyecto de vida y nivel adecuado de vida:
 - a) Caso Villagrán Morales y Otros: Serie C No. 63. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Aparece el concepto de nivel adecuado de vida. El ejercicio del principio de la indivisibilidad.
 - c) Caso Loyaza Tamayo: Serie C No. 42. *Reparaciones* (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 53. *Interpretación de la Sentencia sobre Reparaciones* (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de junio de 1999. Aparece el concepto de proyecto de vida. La ampliación del derecho a la protección jurídica de la vida para una persona aún viva.
 - d) Caso Cantoral Benavides: Serie C No. 69. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Sentencia de Reparación, Serie C. No. 88 de 3 de diciembre de 2001. Respeto al proyecto de vida de la víctima.

BIBLIOGRAFÍA

- A PROTEÇÃO dos Direitos Humanos na ordem internacional", e, "Direitos humanos e a Eficácia da Ordem constitucional" - Livro-Ata do Encontro Internacional dos Direitos humanos realizado em 08 de dezembro de 1992, São Paulo: Ed. LBr. Criação e estratégia- série Eventos 4.
- ALEXY, Robert. Teoría de los derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1993.
- BALAGUER CALLEJÓN, Francisco. Coord. Derecho constitucional. Vol. I. 2ª edición. Madrid, 2003
- BASTOS, Celso. Curso de Direito Constitucional. 12ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1990.
- BOBBIO, N. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro. Ed. Campus. 1992
- BUERGENTHAL. Thomas. La Protección de los Derechos humanos en las Américas. Instituto Interamericano de Derechos humanos. Civitas. 1990.
- CANÇADO TRINDADE, A.A. A Proteção Internacional dos direitos humanos ao final do Século XX. In: Mariano,B.D e Fecho Filho,F. (orgs) A Proteção Nacional e Internacional dos Direitos Humanos: Seminário de Brasília:FIDEH, 1994.
- _____, A Proteção Internacional dos direitos Humanos - Fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. Ed. Saraiva, 1996.
- _____, V Conferência Nacional de Direitos Humanos. Dia 25 de maio de 2000 Câmara dos Deputados, Brasília, DF. Retirado de la página web: <http://www.dhnet.org.br/>

- _____, Dilemas e desafios da Proteção Internacional dos Direitos Humanos no limiar do século XXI. Revista. Brasileira. Polít. Int. 40 (1): 167-177 [1997].
- CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Ed. Almedina, 1993.
- CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio. Ponencia al Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Sevilla, 5 de Diciembre 2003
- CARVALHO RAMOS. André, Direitos humanos em Juízo. São Paulo. Max Limonad.2001.
- COMPARATO. F.K. Fundamento dos Direitos humanos. www.dhnet.org.br
- DIEZ PICAZO. Luiz. Experiencias Jurídicas y Teoría del Derecho. Ed. Ariel. 1edición, Madrid, 1973
- DIEZ PICAZO. Luiz Maria. Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson/ civitas, Madrid, 2003
- DROMI, Roberto. Nuevo Estado. Nuevo Derechos. Constitución para Todos. Consolidación de las leyes. Códigos de solidaridad. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1994
- FIX ZAMUDIO, HÉCTOR. Los Tribunales Constitucionales y los Derechos Humanos. Revista Latinoamericana de derecho. Año 1. Junio de 2004. www.bibliojuridica.org. Fecha consulta: 10 de marzo de 2004.
- FRAGA, Mirtô. O Conflito entre Tratado Internacional e Norma de Direito Interno: estudo analítico da situação do Tratado na ordem jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Forense,1998.
- GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo. Fernández, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo I. 8ª edición. Ed. Civitas, Madrid. 1997
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Los Derechos humanos y la jurisdicción Interamericana. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 2002.
- _____. Dos Temas de la jurisprudencia Interamericana: “Proyecto de vida y Amnistía”. In. Estudios Jurídicos. México. UNAM. Instituto de Investigaciones jurídicas, 2000.
- GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus. Tribunal Constitucional y Reparación de la discriminación normativa. Centro de Estudios Políticos y constitucionales. Madrid. 2000.
- GROS ESPIELL, Héctor. Estudios Sobre Derechos Humanos II. Instituto Interamericano de derechos Humanos Ed. Civitas. 1ª Edición. 1988.
- GUERRA FILHO, Willis Santiago . Coord. Dos direitos Humanos aos Direitos fundamentais. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 1997.
- J. B. Freijedo, Francisco; Villaverde Menéndez, Ignacio; Requejo Rodríguez, Paloma; Presno Linera, Miguel Ángel; Benito Aláez; Ignacio F. Sarasola. Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978. Ed. Tecnos. Madrid, 2004.

- JIMENEZ DE PARGA, M. A. La Pérgola, M. Carrillo, H. Masnatta (...). La Reforma de la Constitución Argentina en perspectiva comparada. Cuadernos y Debates. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996
- LOBO TORRES, Ricardo. Coord. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. Editora Renovar. Rio de Janeiro, 2001.
- LÖSING, Norbert. La Jurisdiccionalidad Constitucional en Latinoamérica. Traducción de Marcela Anzola Gil. Ed. Dykinson. Madrid. 2002
- MASSINI, Carlos I Correas. El Derecho a la vida en la sistemática de los Derechos humanos. En: Problemas Actuales sobre Derechos humanos. Una Propuesta filosófica. Cood. Javier Saldaña. UNAM. México, 2000.
- MERINO MERCHÁN, José Fernando. PÉREZ-UGENA Y COROMINA, Maria; VERA SANTOS, José Manuel. Lecciones de Derechos Constitucional. Ed. Tecnos.Madrid. 1995.
- MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos fundamentais - Teoria Geral. São Paulo: Ed. Atlas, 1997.
- _____, Direito Constitucional. Ed. Atlas. 9ª ed. São Paulo , 2001.
- _____,Direitos Humanos das Vítimas. FOLHA DE S. PAULO en 15 de febrero de 2002.
- OESTREICH, Gerard. Pasado y Presente de los Derechos Humanos. Edición a cargo de Emilio Mikunda. Editorial Tecnos. Madrid. 1990.
- PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, Cuadernos del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas-Universidad Carlos III de Madrid, núm. 26.ed. Dykinson, Madrid, 2003.
- PEDRO NIKKEN, La Protección Internacional de los Derechos Humanos, su desarrollo progresivo, Edt. Civitas, Madrid, 1987.
- PEÑA DE MORAES, Guilherme. Direitos Fundamentais: Conflitos e Soluções. 1 ed. Editora Labor Yuris. Rio de Janeiro, 2000.
- PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Ed. Tecnos. 8 ed. 2003.
- PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo: Ed. Max Limonad., 2000.
- REMOTTI, José Carlos .La Corte Interamericana de Derechos humanos. Estructura, funcionamiento y jurisprudencia. Instituto Europeo de Derechos humanos. Barcelona. España. 2003.
- RESEK, J.F., Direito Internacional Público, São Paulo: Ed. Saraiva, 1996.
- REY MARTÍNEZ, Fernando. La Protección de la vida, un derecho en transformación y expansión (artículo 2 y Protocolo 6). 2004. Artículo pendiente de publicación.
- RODRÍGUEZ Mourullo, Gonzalo. Comentarios a la Constitución Española de 1978. Tomo II Cortes Generales. Editoriales de Derecho Reunidas. 1997.

- SAGÜES, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2. Ed. Astrea. 3ª Edición. 1999.
- SARLET. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 3ª Edición. Livraria do Advogado Editora. Porto Alegre. 2004
- SALDAÑA, Javier. Coordinador. Problemas Actuales sobre derechos humanos. Una propuesta filosófica. UNAM. Méjico. 2000.
- SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 9.a edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1991.
- VENTURA, Deisy de Freitas Lima. A Ordem Jurídica do Mercosul: Porto Alegre: Ed. Livraria do